

AMPARO DIRECTO: D.C. 478/2015.

QUEJOSO: [REDACTED]

MAGISTRADO PONENTE:

GUSTAVO R. PARRAO

RODRÍGUEZ.

SECRETARIO:

CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ

ZAMORA.

México, Distrito Federal, acuerdo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente al día nueve de septiembre de dos mil quince.

VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo directo **D.C. 478/2015**, promovido por [REDACTED] [REDACTED] por su propio derecho, contra el acto reclamado a la **Novena Sala Civil** del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la sentencia definitiva de veintiuno de mayo de dos mil quince, dictada en el toca civil **18/2015/1**, relativo al juicio especial hipotecario **749/2014**, promovido por [REDACTED] [REDACTED]

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED] DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NÚMERO [REDACTED] en contra del ahora quejoso y de [REDACTED] acto que estimó violatorio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.- Mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil catorce, ante la Oficialía de Partes Común Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED] DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NÚMERO [REDACTED] por conducto de su apoderado [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] en la vía

especial hipotecaria, demandó de [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] y de [REDACTED] las siguientes
prestaciones:

“A).- La declaración judicial que realice su señoría del vencimiento anticipado del plazo estipulado para cubrir el importe del adeudo, en virtud del incumplimiento de las obligaciones contraídas por los hoy demandados, lo anterior de conformidad con la cláusula décima octava del Contrato de Apertura de Credito Simple con interés y Garantía Hipotecaria, contenido en el instrumento notarial número [REDACTED]

([REDACTED]
celebrado ante la fe del Titular de la notaria Número [REDACTED] de México, Distrito Federal, Licenciado [REDACTED] instrumento notarial que se acompaña al presente curso como documento base de la acción, en donde se estableció que se podría dar por vencido anticipadamente sin necesidad de declaración judicial el plazo del Contrato de Apertura de Crédito con Interés y Garantía Hipotecaria, y en consecuencia se le

podrían hacer exigible de inmediato el pago total del crédito, intereses causados y demás accesorios legales a los demandados, si éstos dejaran de cubrir puntualmente cualquier cantidad a su cargo, derivada del contrato antes citado, especialmente si dejaba de pagar puntualmente cualquier cantidad a que estuviera obligada conforme al citado contrato. - - -

B).- Como consecuencia de lo anterior, el pago de la cantidad de \$ [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] PESOS 00/100 Moneda Nacional) por concepto de capital de crédito vencido

(suerte principal), como consta en las cláusulas primera y segunda del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria y que así se acredita con la certificación contable expedida por el

Contador Público certificado [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED], con cédula profesional [REDACTED]

(uno, cinco, cinco, uno, tres, siete, nueve) y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. - - - C).- El pago de

la cantidad de \$ [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] *Moneda Nacional*), por concepto de intereses ordinarios, de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, calculados al 07 (siete) de abril de 2014 (dos mil catorce) y que así se acredita con la certificación contable expedida por el Contador Público certificado Fernando Javier Velázquez Díaz, con cédula profesional [REDACTED]

[REDACTED] y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. Así como el pago que por este concepto se continúe generando hasta la total solución del presente juicio y que serán cuantificados en ejecución de sentencia. - - - D).- El pago de la cantidad de \$ [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] */100 Moneda Nacional*), por concepto de intereses moratorios, que se encuentran calculadas hasta el 07 (siete) de abril de 2014 (dos mil catorce) lo anterior en base (sic) a la cláusula

quinta del Contrato de Apertura de Crédito con interés y Garantía Hipotecaria, y que así se acredita con la certificación contable expedida por el Contador Público certificado [REDACTED], con cédula profesional [REDACTED] [REDACTED]) y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. Así como los intereses de este tipo que se continúen generando hasta la total solución del presente juicio y que serán cuantificados en ejecución de sentencia. - - - E).- El pago de los gastos y costas que se originen por la tramitación del presente juicio.”

La parte actora fundó su demanda en los hechos y consideraciones de derecho que estimó pertinentes y que no se hace necesario transcribir.

SEGUNDO.- De la demanda correspondió conocer a la Juez **Septuagésimo Tercero de lo Civil** del Distrito Federal, quien radicó el asunto con el número de expediente **749/2014** y por proveído de dos de septiembre de dos mil catorce, admitió la demanda y ordenó emplazar

a juicio a los demandados para que dentro del término de quince días más cinco más por cuestión de la distancia, diera contestación.

TERCERO.- Mediante escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, el demandado [REDACTED] por su propio derecho, contestó la demanda y opuso las excepciones y defensas que estimó pertinentes.

En escrito presentado el dos de diciembre de dos mil catorce, la parte actora acusó la rebeldía en que incurrió la demandada [REDACTED] al no haber dado contestación a la demanda instaurada en su contra.

En auto de doce de diciembre de dos mil catorce, la juez de primer grado tuvo al enjuiciado [REDACTED] [REDACTED] contestando la demanda en tiempo y forma; asimismo, por lo que respecta a la demandada [REDACTED] [REDACTED] declaró la rebeldía en que incurrió al no haber dado contestación a la demanda.

CUARTO.- Seguido el juicio en todos sus trámites, la Juez **Septuagésimo Tercero de lo Civil** del Distrito Federal, dictó sentencia definitiva el trece de febrero de dos mil quince, que concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

“PRIMERO.- Ha sido procedente la vía especial hipotecaria, en la que la parte actora [REDACTED]

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO [REDACTED] DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NÚMERO

[REDACTED] no probó su acción, el codemandado

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (sic) acreditó su excepción de falta de legitimación activa y la

codemandada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] no

compareció a juicio y se constituyó en rebeldía, en

consecuencia: - - - SEGUNDO.- Se absuelve a los

codemandados [REDACTED] (sic) y

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] de las prestaciones

reclamadas por la actora en el escrito inicial de

demanda. - - - TERCERO.- Se dejan a salvo los derechos de la parte actora para que los haga valer conforme a derecho corresponda. - - - CUARTO.- Se condena a la parte actora al pago de las costas generadas en esta instancia.- - - QUINTO.- Notifíquese.”

QUINTO.- Inconforme, la actora [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED] DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NÚMERO [REDACTED] interpuso recurso de apelación, del que conoció la **Novena Sala Civil** del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la que por sentencia definitiva de veintiuno de mayo del dos mil quince, dictada en el toca de apelación **18/2015/1**, **revocó** la sentencia recurrida, conforme a los siguientes resolutivos:

“PRIMERO.- Se declara fundado el recurso de apelación hecho valer por la parte actora, en consecuencia, se revoca la sentencia definitiva dictada el trece de febrero del año en curso por la C. Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil, en el juicio especial hipotecario, seguido por [REDACTED]

S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED] DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NÚMERO [REDACTED] en contra de [REDACTED]

[REDACTED] y Otra, expediente 749/2014. - - -

SEGUNDO.- *No se hace especial condena en costas. - - -* **TERCERO.-** *Notifíquese, devuélvanse los autos y documentos originales, acompañando copia de esta resolución al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.”*

La revocación mencionada en el resolutive primero que antecede quedó en los siguientes términos:

“PRIMERO.- Ha procedido la vía especial hipotecaria en donde la parte actora [REDACTED] S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED] DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NÚMERO [REDACTED] acreditó su acción, y los codemandados [REDACTED] no acreditó (sic) sus excepciones y defensas, y la señora [REDACTED] se constituyó en rebeldía, en consecuencia.- - - **SEGUNDO.-** Se declara el vencimiento anticipado del plazo estipulado en el Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria contenido en el instrumento [REDACTED] pasado ante la fe del Notario Público [REDACTED] del Distrito Federal.- - - **TERCERO.-** Se condena a los enjuiciados [REDACTED] y [REDACTED] para que paguen a la parte actora o a quien sus derechos represente, la cantidad de \$ [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] PESOS, 00/100 M.N.), por

y para
 que paguen a la parte actora o a quien sus derechos
 represente la cantidad de \$

 /100 M.N.)

por concepto de intereses ordinarios generados al siete de abril de dos mil catorce, más los que se sigan causando por ese concepto, conforme a lo pactado en el contrato base de la acción y en el Estado de Adeudo expedido por el Contador Público Certificado facultado por la actora, los que se cuantificarán en ejecución de sentencia.- - -

QUINTO.- Se condena a y para que paguen a la parte actora o a quien sus derechos represente la cantidad de \$

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] /100 M.N.) por concepto de intereses moratorios calculados al siete de abril de dos mil catorce, y hasta la fecha en que se liquide el adeudo, conforme a lo pactado en la cláusula Quinta del contrato base de la acción y en la certificación contable, lo que se cuantificará en ejecución de sentencia.- - - **SEXTO.-** Se condena a [REDACTED] y [REDACTED] al pago de costas generadas en esta primera instancia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 fracción III del Código de Procedimientos Civiles, mismas que se cuantificarán en ejecución de sentencia.- - - **SÉPTIMO.-** Sáquese copia autorizada de la presente resolución y glósese en el legajo de sentencias correspondiente.- - - **OCTAVO.-** NOTIFÍQUESE.”

SEXTO.- Inconforme [REDACTED]

por su propio derecho, con la sentencia anterior, promovió juicio de amparo directo en su contra el doce de junio de dos mil quince, y la autoridad responsable, previo emplazamiento de la parte tercera interesada, remitió esa

demanda con sus anexos e informe justificado a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Circuito.

De la demanda correspondió conocer a este Tribunal Colegiado, el que la admitió por acuerdo de Presidencia de dos de julio de dos mil quince, se dio la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento.

En auto de veintiocho de agosto de dos mil quince, se ordenó turnar los autos al magistrado Gustavo R. Parrao Rodríguez, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente; y,

C O N S I D E R A N D O:

I.- Este Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, es legalmente competente para conocer y resolver el presente negocio, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso a) y

V; inciso c) de la Constitución General de la República; 170 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse una sentencia definitiva derivada de un juicio especial hipotecario, pronunciada por una autoridad jurisdiccional residente en este circuito.

II.- La certeza del acto reclamado quedó debidamente acreditada con el informe justificado que rindió la autoridad responsable y con los autos originales de primera y segunda instancias que remitió en su apoyo.

III.- La sentencia definitiva reclamada se notificó a las partes mediante boletín judicial publicado el veintidós de mayo de dos mil quince y surtió efectos el veinticinco siguiente, por lo que el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del presente juicio de garantías, transcurrió del veintiséis de mayo al quince de junio de dos mil quince, sin contar los días treinta ni treinta y uno de mayo; seis, siete, trece ni catorce de junio, al haber sido sábados y domingos, y por consiguiente inhábiles en términos de lo dispuesto por

los artículos 19 de la citada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por lo que si la demanda de garantías se presentó el doce de junio de dos mil quince, debe concluirse que se promovió oportunamente.

IV.- La sentencia definitiva reclamada encuentra apoyo en las siguientes consideraciones:

“I.- El recurrente expresó los agravios contenidos en su escrito presentado el dos de marzo del dos mil quince, mismos que se transcriben a continuación: - -

- “PRIMER AGRAVIO.- Causa un primer agravio a mi representada la resolución que se combate, en virtud de la violación a lo dispuesto por el artículo 2926 del Código Civil para el Distrito Federal. - - - El artículo antes invocado es del tenor literal (sic) siguiente: - - - Artículo 2926. El crédito puede cederse, en todo o en parte, siempre que la cesión se haga en la forma que para la constitución de la hipoteca previene el artículo 2917, se dé conocimiento al deudor y sea inscrita en el Registro. Si la

hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones a la orden, puede transmitirse por endoso del título, sin necesidad de notificación al deudor, ni de registro. La hipoteca constituida para garantizar obligaciones al portador, se transmitirá por la simple entrega del título sin ningún otro requisito. - - - Las instituciones del sistema bancario mexicano, actuando en nombre propio o como fiduciarios, las demás entidades financieras y los institutos de seguridad social, podrán ceder sus créditos con garantía hipotecaria, sin necesidad de notificación al deudor, de escritura pública, ni de inscripción en el Registro, siempre que el cedente lleve la administración de los créditos. En caso de que el cedente deje de llevar la administración de los créditos, el cesionario deberá únicamente notificar por escrito la cesión al deudor. - - - En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, la inscripción de la hipoteca a favor del acreedor original se considera hecho a favor de él o los cesionarios referidos en tales párrafos, quienes tendrán todos los derechos y acciones derivados de ésta. - - - Ahora bien, en la sentencia que en este acto se combate el A quo establece medularmente lo siguiente: ‘...Ahora bien en la especie se

llega a la conclusión que la parte actora no acredita los requisitos de procedibilidad de la acción, pues al efecto la misma no dio cumplimiento a lo previsto por el artículo 2036 del Código Civil. Efectivamente al respecto la documental privada consistente en las cartas denominadas NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO DE PAGO de fechas veinticinco de agosto de dos mil catorce, respectivamente, mediante la cual la actora supuestamente notificó a cada uno de los codemandados que [REDACTED]

[REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED] DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NÚMERO

[REDACTED] es el actual titular de los derechos de rédito que le fue otorgado por Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. en fecha quince de octubre de dos mil siete, así como de que [REDACTED] S.A. de C.V. fue designada como de administradora, resultan por si mismas insuficientes para acreditar la notificación requerida por el artículo 2036 del Código Civil, para que la actora en este juicio pudiese ejercitar sus acciones, toda vez que en

primer lugar dicha carta no cumple con lo previsto por la última parte del artículo 2033 del mismo ordenamiento legal. Asimismo cabe precisar que si bien es cierto los apoderados legales de [REDACTED] [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO [REDACTED] DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NÚMERO [REDACTED] en el escrito inicial de demanda expresaron en el hecho número (15) que: “Tal y como se acredita con la carta de notificación que se acompaña al presente escrito, con fecha veinticinco de agosto del año en curso, se le notificó a los hoy demandados la cesión del crédito materia de este juicio ante dos testigos, así como la designación del administrador; con fundamento en el artículo 2036 del Código Civil para el Distrito Federal” también lo es que la Apoderada de la actora en su escrito de fecha veintinueve de agosto de dos mil catorce, relativo al escrito inicial de demanda en el apartado de ofrecimientos de pruebas de su representada ofreció la CONFESIONAL a cargo del codemandado [REDACTED] [REDACTED] (sic) [REDACTED] y

la cual no le beneficia a sus intereses en virtud que de las posiciones que fueron calificadas de legales, especialmente la décima, negó que el día veinticinco de agosto de dos mil catorce, le fuera notificada dicha cesión, no obstante lo anterior dicha documental fue objetada por el codemandado señalando como defensas de su parte lo siguiente: “En ningún momento fui debidamente notificado de la citada cesión de derechos crediticios, en virtud de lo anterior se deja claramente establecido la falta de legitimación activa de la parte actora del presente procedimiento... - - -

Consecuentemente y al no haber acreditado fehacientemente la accionante haber dado cumplimiento a lo dispuesto por el precepto legal invocado, la acción que se ejercita no puede prosperar, debiéndose dejar a salvo sus derechos para hacerlos valer conforme corresponda a sus intereses, absolviéndose a los codemandados de las prestaciones reclamadas por su parte en esta instancia.

- - - Las estimaciones realizadas por el A quo resultaron infundadas, pues de constancias procesales mismas que gozan de valor probatorio pleno se desprende que quien comparece [REDACTED] [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO [REDACTED] DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NÚMERO [REDACTED] asimismo se desprende que quién cedió el acreditó fue una entidad financiera a saber [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, motivo por el cual y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2926 del Código Civil las instituciones del sistema bancario mexicano, actuando en nombre propio o como fiduciarias, las demás entidades podrán ceder sus créditos con garantía sin necesidad de notificación al deudor, de escritura pública, o de inscripción en el Registro, siempre que el cedente lleve la administración de los créditos y en caso de que el cedente deje de llevar la administración de los créditos, el cesionario deberá únicamente notificar por escrito la cesión al deudor. - - - De constancias procesales y en especial del escrito inicial de demanda se desprende que la materia de la cesión fue un crédito con garantía hipotecaria celebrado entre dos entidades financieras

motivo por el cual únicamente es necesario notificar por escrito a los acreedores hoy demandados la cesión del crédito hipotecario para tener legitimación activa en el presente juicio, lo cual si aconteció pues en el escrito inicial de demanda se acompañaron las cartas de notificación que se practicaron a los codemandado con lo cual se da cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2926 del Código Civil, cuestión que no fue valorada por el Juzgador de primera instancia. - - - En efecto, resulta infundado lo manifestado por el inferior jerárquico en el sentido que se debió haber dado cumplimiento a la última parte del artículo 2933 en el sentido de que la cesión de mérito debió hacerse en escritura pública, pues dicha hipótesis solo es aplicable a personas físicas o morales que son entidades financieras, pero como para el caso que nos ocupa la cedente es una entidad financiera regulada por la ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como por la Ley de Instituciones de Crédito y la cesionaria es una institución de Banca Múltiple, compareciendo como Fiduciario no es necesario que dicha cesión conste en escritura pública de conformidad con el artículo 2926 del

*Código Civil para el Distrito Federal, tanto la cedente como la cesionaria actuando en nombre propio o como fiduciarias, las demás entidades financieras y los institutos de seguridad social podrán ceder sus créditos con garantía hipotecaria, sin necesidad de notificación al deudor, de escritura pública, ni de inscripción en el Registro. - - - En virtud de lo anterior, solicito a su Señoría se revoque la sentencia que se combate, para condenar a los demandados al pago de prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda. - - - **SEGUNDO AGRAVIO.-***

Causa un segundo agravio a mi mandante la resolución que se impugna en virtud de la violación a lo dispuesto por el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el cual establece: - - - ‘Artículo 402.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia. En todo caso el tribunal deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión.’ - - -

El juzgador de primera instancia, realizó una indebida valoración de todas las pruebas aportadas por las partes pues argumenta que no se dio cumplimiento a lo dispuesto

por el artículo 2036 del Código Civil para el Distrito Federal, basándose únicamente en la confesional a cargo del codemandado [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] específicamente en la posición décima donde dicho codemandado negó que el día veinticinco de agosto de dos mil catorce le fuera notificada dicha cesión y en base (sic) al argumento vertido por el demandado al dar contestación a la demanda en donde de igual forma negó que se le hubiera notificado la cesión de mérito, pero el A quo omite valor (sic) las pruebas en conjunto conforme a la experiencia lógica y jurídica pues de constancias procesales se desprende que el A quo omitió valorar las documentales consistentes en las NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTO DE PAGO practicadas a los demandados en fecha 25 de agosto de 2014 mismas que adminiculadas con la declaración confesa de la codemandada [REDACTED] al no haber dado contestación a la demandada y con la confesión de la codemandada [REDACTED] respecto de la prueba confesional a su cargo, llevan a la convicción de que sí se notificó a los codemandados la cesión del crédito materia del juicio. - - - En efecto, en primer lugar basta

mentar que la confesional a cargo del codemandado [REDACTED] no es una prueba tasada por lo tanto dicha prueba debe valorarse en conjunto con las demás probanzas aportadas por las partes, y de constancias procesales se desprende que fueron exhibidas las notificaciones de la cesión de derechos practicadas a los demandados, asimismo se desprende que la codemandada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] no dio contestación a la demandada instaurada en su contra motivo por el cual de conformidad con el auto admisorio de fecha dos de septiembre del año dos mil catorce se tuvo con (sic) confesa a la codemandada [REDACTED] [REDACTED] de los hechos constitutivos de la demanda especialmente del hecho 15 en donde se manifiesta que se les notificó la cesión materia de este juicio, asimismo de constancias procesales se desprende que la codemandada antes citada no compareció a la prueba confesional a su cargo siendo declara (sic) confesa del total de las posiciones que fueron calificadas de legales; en especial de la marcada con el número 10 (diez) mismas que es del tenor literal (sic) siguiente: “10.- QUE EN FECHA 25 (VEINTICINCO) DE AGOSTO DEL 2014 (DOS MIL

CATORCE) LE FUE DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA CESIÓN DEL CRÉDITO MATERIA DEL PRESENTE JUICIO, pruebas que no fueron valoradas en su conjunto ni adminiculadas por el A quo y por ello causa un perjuicio a mi mandante.- - - El A quo se limita a valorar únicamente la prueba confesional a cargo del codemandado [REDACTED] y la parte conducente de su escrito de contestación en donde niega que le fue notificada la cesión del crédito, pero omite valorar en base (sic) a la experiencia y a la lógica jurídica las demás probanzas y constancias procesales como son que se tuvo la codemandada [REDACTED] por confesa de los hechos constitutivos de la demanda, que se exhibieron las constancias de las notificaciones de la cesión del crédito practicadas a los codemandados ante dos testigos, así como la confesional a cargo de [REDACTED] en donde se le declaró confesa de la posición marcada con el número diez y que ya se transcribió con anterioridad. - - - Al no haber valorado el A quo las pruebas en conjunto causa perjuicio a la parte actora pues emite un fallo parcial fundado en una confesional que no es una prueba tasada, si no que por el

contrario es una mera presunción que debe ser valorada en conjunto con el resto de las probanzas y con constancias procesales, siendo que de constancias procesales se desprende que el codemandado manifestó nunca haber celebrado contrato ni haber recibido el crédito, siendo que lo anterior consta en escritura pública y se documentó con el pagaré que se exhibió en auto (sic), motivo por el cual no puede concederse credibilidad a lo manifestado por el demandado en el sentido que no se le notificó la cesión del crédito, pues de constancias procesales se desprende que dicho enjuiciado se ha conducido con falsedad. - - - En virtud de lo anterior, solicitó se revoque la sentencia que en este acto se impugna y se dicte una nueva sentencia en la cual se condene al demandado al pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas.’ - - -

II.- Los motivos de disenso formulados por el señor [REDACTED] [REDACTED] apoderado legal de la parte actora, resultan substancialmente fundados a fin de revocar la determinación apelada, en virtud de los razonamientos jurídicos que se exponen a continuación. - - - En efecto, de la lectura integral del

escrito inicial de demanda es posible corroborar que la enjuiciante, en lo que aquí importa, aseveró lo siguiente: '15.- Tal y como se acredita con la carta de notificación que se acompaña al presente escrito, con fecha 25 de agosto del año en curso, **se les notificó a los hoy demandados la cesión del crédito materia de este juicio ante dos testigos, así como la designación del administrador, con fundamento en el artículo 2036 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de las demás entidades federativas**, de la cual se agrega constancia de la misma; así como la voluntad de la parte actora de denunciar el vencimiento del contrato e indicar el monto adeudado a los hoy demandados, así como la cuenta bancaria para realizar el pago de conformidad con lo pactado en la Cláusula Décima Octava del Contrato Base de la Acción, misma que se acompaña al presente escrito como ANEXO SEIS.' - - - Tal aseveración cobra singular relevancia en el caso que nos ocupa, pues es evidente, que constituye uno de los elementos sobre los cuales la enjuiciante hizo consistir sus pretensiones, y por ello, a la luz de lo

*dispuesto en el artículo 281 del Código Adjetivo Civil tenía el deber procesal de justificar. - - - Así, es del todo congruente que la sentencia recurrida se ocupara de ese tópico por formar parte integral de la litis natural, máxime si se toma en cuenta, que el enjuiciado en su escrito de contestación a la demanda fue por demás categórico al indicar: ‘...no se aprecia, **ningún documento en donde se advierta que el suscrito fui debidamente notificado de la cesión de derechos** celebrada entre la Institución de Crédito cedente, y la actual cesionaria, no obstante de lo anterior, me permito manifestar que el suscrito **en ningún momento fui debidamente notificado de la citada cesión de derechos crediticios** motivo por el cual desde este preciso momento ocurro a objetar e impugnar formal y legalmente la citada cesión de derechos, y en virtud de lo anterior se deja claramente establecido, la falta de legitimación activa por parte de la actora del presente procedimiento, al no haberse legitimado frente al suscrito como la nueva titular de los supuestos*

derechos de crédito que adquirió de parte de la cedente... - - - Esto es, en tanto la actora sostuvo que notificó a los demandados la cesión del crédito; en cambio para los enjuiciados, dicha notificación no se llevó a cabo; motivo por el cual según se ha visto, objetaron e impugnaron formal y legalmente la citada cesión de derechos; porque desde su particular punto de vista, no existió ningún documento donde se advirtiera que fueron debidamente notificados de la referida cesión de derechos. - - - En ese tenor, era indispensable que la juez natural abordara su análisis en estricto acatamiento de lo previsto en el ordinal 81 de la legislación procesal en consulta, máxime si se toma en cuenta, que el tema relativo a la improcedencia de la acción, por falta de uno de sus requisitos esenciales, puede ser estimada por la juzgadora, aún de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia del derecho impetrado. - - - Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número seis, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, Tomo IV,

Parte SCJN, en el Apéndice de 1995, intitulada:

‘ACCION. ESTUDIO OFICIOSO DE SU

IMPROCEDENCIA.’ - - - Por ende, si en esta

instancia el representante de la sociedad disidente

señala, que se conculcó en su perjuicio lo dispuesto

en el artículo 2926 del Código Civil toda vez que las

instituciones del sistema bancario mexicano pueden

ceder sus créditos con garantía **sin necesidad de**

notificación al deudor, de escritura pública, o de

inscripción en el Registro, siempre y cuando el

cedente lleve la administración de los créditos; es

claro que su argumento es infundado, porque dicha

premisa no llegó a formar parte de la litis natural, ni el

dispositivo legal aludido (2926 del Código Civil) fue

invocado como fundamento de su acción en el

sentido de que **no era necesaria la notificación a**

los obligados, antes bien, según se ha demostrado

planteó una cosa distinta. - - - Comparte idénticas

consideraciones jurídicas, lo atingente a que se dio

cabal cumplimiento a lo dispuesto en **el artículo**

2926 de la codificación en comento; ya que en su

demanda inicial la accionante con toda nitidez puso

de relieve que: ‘...se les notifico (sic) a los hoy demandados la cesión del crédito materia de este juicio ante dos testigos, así como la designación del administrador, con fundamento en el artículo 2036 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de las demás entidades federativas..’; y en esa virtud la juzgadora natural no tenía la obligación de abordar el análisis del dispositivo legal citado en primer término, porque es obvio, que esa cuestión es ajena a la litis natural. - - -

Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 783, Tomo V, Junio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que refiere lo siguiente: - - - **‘SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA APELACION.’** (Se transcriben datos de localización y texto.) - - - En el contexto procedimental que ya se ha destacado en el presente capítulo, nada tiene de “infundado” el hecho de que la juez de primer grado

abordara el análisis de lo previsto en el ordinal 2033 del Código Sustantivo Civil, puesto que la enjuiciante fue categórica al aseverar que, les notificó a los demandados la cesión del crédito litigioso ante dos testigos, así como la designación del administrador, con fundamento en el artículo 2036 de aquélla codificación y sus correlativos de las demás entidades federativas. - - - Ahora bien, el marco legal aludido respectivamente establece lo siguiente: - - - '**Artículo 2033.**' (Se transcribe). - - - '**Artículo 2036.**' (Se transcribe). - - - Esto es, acorde a lo manifestado por la actora en el sentido de que había observado el contenido de la norma transcrita en segundo término (2036), no era óbice para que la juzgadora de primer grado verificara lo previsto en el numeral 2033 toda vez que el legislador con toda nitidez así lo previó. - - - Empero, lo fundado de los agravios que se analizan radica, en que en el caso específico, no era indispensable que tanto la cesión del crédito litigioso como la notificación a los obligados **constara en escritura pública**, por constituir un caso de excepción a que alude el

artículo 2926 de la legislación en consulta, que en lo que aquí importa, textualmente indica: - - - ‘Artículo 2926.’ (Se transcribe). - - - Así también lo tiene establecido la tesis de la Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Enero de 2010. Materia: Constitucional, Civil. Página: 257, al referir lo siguiente: - - - ‘CESIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS. EL ARTÍCULO 2926 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.’ (Se transcriben datos de localización y texto). - - - De lo que se colige, que el tema relativo de la notificación a los deudores (ante testigos) por escrito de la citada cesión de crédito, es una particularidad que sí cobra vigencia en el caso específico y que tenía que ser corroborada por parte de la juez de primer grado, tomando desde luego en cuenta que fue la propia actora quien lo aseveró, e incluso, la sentencia apelada lo identificó como un elemento de la acción, todo ello sin perder de vista que el marco legal identificado en líneas que anteceden también

*coincide sobre esa exigencia. - - - Así, el veredicto recurrido al abordar su análisis, puntualizó que la documental privada consistente en las cartas denominadas **NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO DE PAGO** de veinticinco de agosto de dos mil catorce, a través de las cuales la actora notificó a los demandados que la enjuiciante era la actual titular de los derechos de crédito cedidos por [REDACTED] [REDACTED] **S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.** el quince de octubre de dos mil siete, y que la empresa [REDACTED] **S.A. DE C.V.** fue designada como administradora, resultaban: ‘...por si mismas insuficientes para acreditar la notificación requerida por el artículo 2036 del Código Civil para que la actora en este juicio pudiese ejercitar sus acciones, toda vez que en primer lugar dicha carta no cumple con lo previsto por la última parte del artículo 2033 del mismo ordenamiento legal.’; y que: ‘...la Apoderada de la actora en su escrito de fecha veintinueve de agosto de dos mil catorce, relativo al escrito inicial de demanda en el apartado de ofrecimiento de pruebas de su representada, ofreció*

la CONFESIONAL a cargo del codemandado

____ (sic) y _____

_____ la cual no le beneficia a sus intereses en virtud de que de las posiciones que fueron calificadas de legales, específicamente la décima, negó que el día veinticinco de agosto de dos mil catorce, le fuera notificada dicha cesión, no obstante lo anterior, **dicha documental fue objetada por el codemandado** señalando como defensas de su parte lo siguiente 'En ningún momento fui debidamente notificado de la citada cesión de derechos crediticios, en virtud de lo anterior se deja claramente establecido la falta de legitimación activa de la parte actora del presente procedimiento, al no haberse legitimado frente al suscrito como la nueva titular de los supuestos derechos de crédito que adquirió la parte cedente...', más al advertirse, que las manifestaciones que contiene la documental fueron realizadas de manera unilateral, sin que se haya hecho del conocimiento de los codemandados, los que ninguna participación tuvieron en las misma pues no se advierte (sic) de estas la firmas de

*recibido de los codemandados.’ - - - Esto es, la identificación precisa y categórica sobre la existencia de la **documental privada** consistente en las cartas denominadas **NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO DE PAGO** de veinticinco de agosto de dos mil catorce a través de las cuales la actora notificó a los demandados que era la actual titular de los derechos de crédito cedidos por [REDACTED] **S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.**; de suyo torna en infundado lo alegado por el coenjuiciado en relación de que no existía ningún documento en donde se advirtiera que había sido debidamente notificado de la cesión de derechos, y por ello, que era falso lo que se había planteado en la demanda inicial. - - - De igual modo, y como bien lo indica el disidente, se incurrió en una incorrecta valoración del material probatorio que se rindió en el proceso de origen, pues si por un lado el demandado dijo que no había ningún documento donde se advierta que había sido debidamente notificado, entonces por otro lado, no se podía determinar que la **documental privada** consistente en las cartas denominadas*

NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO DE PAGO de

veinticinco de agosto de dos mil catorce, habían sido objetadas por el enjuiciado, pues ello es por demás contradictorio y por ende ilógico, máxime si se toma en cuenta que en el juicio natural no existe ningún acuerdo que hubiera tenido por objetadas las citadas misivas. - - - Ahora bien, partiendo de una interpretación de lo que el demandado planteó en su escrito de contestación (hecho 15), se obtiene, que efectivamente el obligado aseveró que, en las copias de traslado que se le hicieron llegar no apreció ningún documento en donde se advirtiera que había sido debidamente notificado de la cesión de derechos, motivo por el cual **objetó e impugnó formal y legalmente la citada cesión**; esto es, el motivo de su objeción lo hizo consistir en la inexistencia de algún instrumento que así lo pusiera de relieve más no combatió el contenido literal de las cartas que exhibió la accionante, lo cual era indispensable para que después la sentencia apelada pudiera válidamente estimar, que no cumplían con lo previsto por la última parte del artículo 2033 del

mismo ordenamiento legal.’; que habían sido objetadas por el demandado; y que las manifestaciones que contenían las documentales fueron realizadas de manera unilateral, sin que se haya hecho del conocimiento de los codemandados, los que ninguna participación tuvieron en las mismas pues no se advertía de éstas la firmas de recibido de los codemandados. - - - Esto es, en la especie se abordó de manera incorrecta la forma y los términos en que se hizo valer la acción así como el modo en que finalmente quedó integrada la litis, pues si en el mayor de los casos en las copias de traslado que se le entregaron al demandado no se incluyeron los documentos que invocó, lo procedente era que esta parte hiciera valer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 74, 76 y 77 del Código Adjetivo Civil con la finalidad de subsanar esa omisión a través de la reposición de la diligencia supuestamente viciada y obtener así la copia de las referidas documentales, porque de lo contrario es claro que dejó intocada esa particularidad, y por ello su valoración debió realizarse como si hubieran sido

reconocidas expresamente por el demandado. - - -

Así lo tiene claramente establecido el artículo 335 de la codificación en comento al establecer lo siguiente:

*- - - ‘**Artículo 335.**’ (Se transcribe). - - - Por tanto, la circunstancia de que el señor [REDACTED]*

[REDACTED] (sic) al absolver las posiciones que fueron calificadas de legales, específicamente la Décima, negara que el día veinticinco de agosto de dos mil catorce le fue notificada la cesión de derechos; como bien se indica fue valorada de manera errónea, dado que no se observaron las reglas de la lógica y de la experiencia, relativas a que el resultado de dicho elemento de convicción sólo tiene trascendencia en lo que el interesado admite en su perjuicio más no en lo que le beneficia, amén de que al permanecer inobjetadas de su parte las aludidas misivas, legalmente tenía que partirse de la base, de que habían sido reconocidas expresamente por el demandado, esto, a la luz del dispositivo legal transcrito en líneas que anteceden. - - - Apoya lo anterior, el criterio del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación Tomo: XIII.

1993. Octava Epoca. Página: 395, que refiere lo

siguiente: - - - ‘PRUEBA CONFESIONAL, VALOR

DE LA.’ (Se transcriben datos de localización y texto).

- - - Conjuntamente con lo anterior, este Tribunal

advierde que al momento de abordarse el estudio de

la procedencia de la acción de primer grado, de

manera específica en lo atinente a la notificación al

deudor de la referida cesión del crédito, se perdió de

vista que ello no implicaba en forma alguna, que la

notificación de que se trata tenía que cumplir con

ciertos requisitos o formalidades especiales, sino

únicamente con los establecidos por la ley (artículo

2036), que en lo conducente prevé, que: ‘...para que

el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el

*deudor, **deberá hacer a éste la notificación de la***

cesión, ya sea judicialmente, ya en lo

extrajudicial, ante dos testigos o ante notario.’ - - -

Es decir, en las misivas en cuestión sólo era

indispensable que se notificara a los deudores la

cesión del crédito con la entrega del documento en el

que conste la leyenda relativa a su transmisión y

*acuse de recibo por el deudor mediante contraseña, contrarrecibo o cualquier otro signo inequívoco de su recepción. - - - Por tanto y en opinión de esta Alzada, las cartas que fueron enviadas por la actora a los enjuiciados, sí evidencian con toda nitidez su recepción por parte de los acreditados, porque tanto en la demanda inicial como en los documentos exhibidos como fundatorios de la acción (donde se localizan las citadas misivas), se observa que contienen el accuse de recibo por parte de los obligados, accuse que corre agregado a las carta enviadas tanto a [REDACTED] como a la señora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] por el apoderado legal para pleitos y cobranzas de [REDACTED] **S.A. DE C.V.**, licenciado [REDACTED] [REDACTED], mediante las cuales comunicó a los aludidos deudores en presencia de dos testigos, **LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO, LA CESIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO EL REQUERIMIENTO DE PAGO DEL SALDO INSOLUTO VENCIDO, MÁS ACCESORIOS LEGALES.** - - - Por ello, es incuestionable que la*

actora sí **probó haber efectuado a los codeudores la notificación prevista por la ley**; máxime si se toma en cuenta que en los acuses de recibo se aprecia la leyenda: **RECIBIO; NOMBRE; FIRMA**; donde se observa **una firma ilegible de recibido** el veinticinco de agosto de dos mil catorce, cúmulo de particularidades que según se ha visto, no fueron combatidas ni objetadas por los codemandados aun cuando tuvieron oportuno conocimiento de que la actora aseveró que ellos las habían recibido ante dos testigos. - - - Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis de jurisprudencia del SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Epoca: Novena Epoca. Tomo XII, Diciembre del 2000. Página: 1137, que refiere lo siguiente: - - - **‘ACCIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LOS ELEMENTOS DE LA, EN SEGUNDA INSTANCIA.’** (Se transcriben datos de localización y texto). - - - No es óbice mencionar, que por las razones expuestas en líneas que anteceden, lo considerado por la sentencia apelada en relación

de que las cartas de notificación fueron elaboradas de manera unilateral sin que se hicieran del conocimiento de los demandados, los que ninguna participación tuvieron en las mismas porque no se advertía sus firmas de recibido; en realidad carece de sustento, porque ello no fue alegado por los enjuiciados, antes bien según se ha visto, en todo momento conocieron los eventos que les atribuyó la accionante en su demanda, en relación de que a través de las cartas en comento les notificó de manera personal la cesión del crédito, por lo que en el mayor de los casos, corría a cargo de los demandados el deber procesal de desvirtuar su participación en esos actos, o bien, justificar que las firmas de recibido que aparecen en dichos documentos no habían sido estampadas de su puño y letra. - - - Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el

punto de vista racional y de la lógica, es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba. - - - En mérito de lo hasta aquí expuesto, y al evidenciarse que las consideraciones que sirvieron de base para desestimar la acción de primer grado fueron desafortunadas, este Tribunal en plenitud de jurisdicción entra al estudio integral de lo reclamado en el juicio natural, advirtiendo que el derecho impetrado debe declararse procedente según se demuestra a continuación. - - - En efecto, como bien lo asentó la sentencia recurrida en este aspecto, en la especie, la parte actora demandó en la vía especial hipotecaria de los señores [REDACTED] [REDACTED] (sic) y [REDACTED] lo siguiente: a) la declaración judicial del vencimiento anticipado del plazo estipulado para cubrir el monto del adeudo, en virtud del incumplimiento de las obligaciones contraídas por los enjuiciados, de conformidad con lo previsto en la cláusula Décima Octava del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria contenido en el

instrumento notarial [REDACTED] (ciento veintidós mil quinientos setenta y siete) celebrado ante la fe del Notario Público [REDACTED] de México, Distrito Federal licenciado [REDACTED]

donde quedó establecido que se podría dar por vencido anticipadamente, sin necesidad de declaración judicial, el plazo del Contrato de Apertura de Crédito, y en consecuencia, se les podría hacer exigible de inmediato el pago total del crédito, intereses causados y demás accesorios legales a los demandados, si éstos dejaban de cubrir puntualmente cualquier cantidad a su cargo derivada del referido convenio, de manera específica, si dejaban de pagar puntualmente cualquier cantidad a que estuvieran obligados conforme al citado contrato;

b) como consecuencia de lo anterior el pago de la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

*[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] **M.N.)** por concepto de CAPITAL DE CRÉDITO VENCIDO (suerte principal), según consta en las cláusulas Primera y Segunda del contrato basal, y con la*

Certificación Contable expedida por el Contador Público certificado [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] Z, con cédula profesional (1 [REDACTED]), con fundamento en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito; c) el pago de la cantidad de \$ [REDACTED]

[REDACTED] M.N.) por concepto de INTERESES ORDINARIOS de conformidad con lo establecido en la cláusula Cuarta del Contrato de Apertura de Crédito, calculados al siete de abril de dos mil catorce, así como el pago que por ese concepto se continúe generando hasta la total solución del presente juicio y que serían calculados en ejecución de sentencia; d) el pago de la cantidad de \$ [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] /100 M.N.) por concepto de INTERESES MORATORIOS, calculados hasta el siete de abril de dos mil catorce, con base en la cláusula Quinta del contrato básico, así como con el certificado contable, así como los intereses de este

tipo que se continúen generando hasta la total solución del presente juicio y que serían calculados en ejecución de sentencia; y e) el pago de los gastos y costas que se originen por la tramitación del presente juicio. - - - Previos los trámites de ley, sólo el demandado [REDACTED] [REDACTED] (sic) en su escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil catorce dio oportuna contestación a las prestaciones reclamadas, negando su procedencia por las razones que adujo en su referido curso, oponiendo entre otras, la excepción de **INCOMPETENCIA**, la cual fue declarada infundada por este Tribunal mediante resolución del trece de enero de dos mil quince; asimismo, la de **IMPROCEDENCIA DE LA VIA**, y la de **FALTA DE PERSONALIDAD DE LA ACTORA**, mismas que se declararon improcedentes en la audiencia celebrada el veinte de enero de dos mil quince (foja 179 del expediente natural). - - - La esencia de la litis natural así como la necesidad de cubrir los montos que se especificaron en la demanda inicial, se hizo consistir de manera substancial, en lo siguiente: ‘...los

*codemandados, han incumplido con su obligación de pago desde la erogación correspondiente al mes de octubre de 2007 y que debieron efectuar precisamente el día 28 de octubre de 2007 tal y como se acredita con la certificación contable expedida por el Contador Público certificado [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], con cédula profesional [REDACTED] [REDACTED]) y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito...' (Hecho 11). - - - Al referirse a lo anterior, el demandado aseveró: '...resulta ser falso de manera total el contenido del mismo, ya que como se insiste de nueva cuenta y tal como lo expresa el suscrito en líneas que anteceden, **el suscrito en ningún momento recibió de parte de la Institución de Crédito alguna cantidad de dinero con motivo del contrato de apertura de crédito multicitado**, y como consecuencia inmediata de lo anterior, el nunca haber recibido el suscrito crédito alguno por medio o cantidad de dinero alguna por parte de la Institución de Crédito en comento, resulta totalmente imposible y fuera de toda lógica*

*simple, que el suscrito haya incumplido con la obligación del pago de un crédito el cual nunca dispuso en ningún momento, arrojando desde este mismo momento la carga de la prueba de a la parte actora del presente procedimiento a fin de que demuestre mediante documental idónea la disposición del crédito por parte del suscrito.’ - - - No es óbice mencionar, que al contestar los hechos (1 y 2) de la demanda, el enjuiciado con toda nitidez **reconoció la suscripción del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria**, en los modos, términos y condiciones que se asentaron en dicho acto, así como que la escritura quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México. - - - De igual modo, la enjuiciante en el hecho 4 de la demanda narró lo siguiente: ‘Tal y como se acredita con el pagaré suscrito por los hoy demandados a favor de [REDACTED] [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, con fecha 15 (quince) de octubre del*

año 2007 (dos mil siete) lo (sic) hoy demandados **dispusieron de la totalidad del crédito**, es decir, de

la cantidad de \$ [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] /100 M.N.).' - - - Por

su parte el enjuiciado, en lo que aquí importa, replicó lo siguiente: "4.- En cuanto al cuarto punto de hechos

expuesto (sic) por el actor en su escrito inicial de demanda, me permito mencionar que el pagaré que

fue firmado en su oportunidad por el suscrito, fue

firmado a su vez como parte protocolaria del contrato de apertura de crédito, y sólo para el

efecto de documentar tal y como lo expresa el mismo contrato, el supuesto crédito concedido,

pero en el presente caso en particular y tal como lo advertí oportunamente en líneas que anteceden, no

hubo por parte del suscrito disposición alguna del citado crédito, por lo tanto desde este momento

impugno y objeto el pagaré que acompaña el accionante a su escrito de demanda por la cantidad

de \$ [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

██████████ /100 M.N.), porque dicho título de crédito, es un documento causal que fue derivado en forma simultánea con la suscripción del citado contrato de apertura de crédito, y en el mismo no resulta ser prueba suficiente o idónea para que el actor pueda comprobar la disposición del supuesto crédito concedido por la Institución de Crédito, a su vez del propio contrato se deriva que en ese día no se iba a hacer disposición alguna de dinero, sino que la cantidad total del crédito, se iba a otorgar en parcialidades, las cuales a su vez tampoco fueron recibidas.’ - - - De lo que se obtiene, que conjuntamente con el reconocimiento de la suscripción del contrato de apertura de crédito, el demandado también aceptó el hecho de haber firmado el aludido título de crédito, especificando, que fue **firmado como parte protocolaria del contrato de apertura de crédito, y sólo para el efecto de documentarlo, como lo expresa el mismo contrato, el supuesto crédito concedido, pero en el presente caso en particular, no hubo de su parte disposición alguna del citado crédito.** - - -

Así las cosas, y ante el reconocimiento categórico del enjuiciado en relación a la suscripción tanto del citado convenio básico como del pagaré, se estima procedente conferirle pleno valor probatorio al citado título de crédito como al contrato, el segundo de los mencionados, dada su propia y especial naturaleza de instrumento público en términos de lo dispuesto por los artículos 327 fracción I, 333 y 403 del Código de Procedimientos Civiles, habida cuenta que no fue impugnado por los enjuiciados ni objetado en forma alguna, debiendo estarse las partes al sentido literal de sus cláusulas dado que sus términos son claros sobre la intención de los contratantes, al no haberse suscitado controversia alguna respecto de los términos pactados, y por ende, acreditada cabalmente la relación contractual que une a los contrincantes consistente, en que los enjuiciados se obligaron a destinar el importe del crédito para su ‘liquidez’ (cláusula financiera A), constituyendo para tal propósito HIPOTECAS ESPECIALES, EXPRESAS Y EN PRIMER LUGAR EN FAVOR DE “LA ACREDITANTE”, sobre los inmuebles que se

identificaron en la cláusula Octava. - - - Igualmente del citado convenio se aprecia, (cláusula financiera A), que la actora otorgó a los codemandados un crédito por la cantidad de \$ [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] /100 M.N.) como importe total del préstamo numero “ [REDACTED]

[REDACTED]) que “EL ACREDITADO” destinaría para liquidez. - - - En cuanto a la disposición de los citados recursos, la cláusula Segunda del acuerdo de voluntades en comento, puntualizó lo siguiente:

‘SEGUNDA.- DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO.- ‘EL ACREDITADO’ podrá disponer del importe del crédito concedido con posterioridad a la firma del presente contrato con la conformidad de la ACREDITARTE (sic) en los siguientes términos: A) La cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, que se depositará en la cuenta número [REDACTED], con clabe interbancaria número [REDACTED], del banco [REDACTED] [REDACTED] SOCIEDAD ANONIMA,

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO [REDACTED] y a favor del señor [REDACTED]

[REDACTED] B) La cantidad de

[REDACTED]

[REDACTED], **MONEDA NACIONAL**, que se depositará en

la cuenta número [REDACTED], con clabe

interbancaria número [REDACTED] del

banco [REDACTED] **SOCIEDAD ANONIMA,**

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO

FINANCIERO [REDACTED] y a favor del señor [REDACTED]

[REDACTED] de la que es titular 'EL

ACREDITADO' y de igual forma podrá recibir

directamente de 'LA ACREDITANTE', en caso de

imprevistos, el importe de la disposición del crédito,

firmando pagarés y todo tipo de documentos que

acusen el recibo de las mismas. **Para documentar**

las disposiciones del presente crédito, 'EL

ACREDITADO', suscribirá pagarés u otros

documentos, a favor de 'LA ACREDITANTE', a

satisfacción de la misma por el importe total del

crédito, los cuales deberán reunir las características

establecidas en el artículo ciento setenta de la Ley de

Títulos y Operaciones de Crédito y su entrega no se considera como pago, ya que la suscripción de estos solamente documentan la disposición realizada al amparo del presente contrato.' - - - Asimismo, los acreditados **se obligaron a amortizar el crédito concedido en un plazo de DIECIOCHO MESES contados a partir de la fecha de firma de dicho instrumento** (cláusula Tercera). - - - También se advierte, que el notario público (foja 27 del contrato de mérito), les leyó y explicó el contenido de la escritura a los comparecientes, quienes **le manifestaron su conformidad con ella y la firmaron el quince de octubre de dos mil siete.** - -

- De igual modo se observa que la enjuiciante, exhibió **el pagaré** único suscrito el quince de octubre de dos mil siete por el señor [REDACTED]

[REDACTED] (suscriptor), y por la aval [REDACTED]

[REDACTED] por la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] /100 M.N.), a la orden de [REDACTED]

[REDACTED] **S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** - - -

También, la demandante presentó el certificado contable expedido por el contador público [REDACTED] designado por [REDACTED] [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED] DIVISIÓN FIDUCIARIA, ÚNICAMENTE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO [REDACTED] donde se especificó que el acreditado era el señor [REDACTED] [REDACTED] (sic) y la garante hipotecaria [REDACTED] [REDACTED] a quienes se les otorgó un CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON GARANTÍA HIPOTECARIA del quince de octubre de dos mil siete, por la cantidad de \$ [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] PESOS, 00/100 M.N.) por concepto de capital vencido, más intereses ordinarios de \$ [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] /100 M.N.) generados del dieciséis de octubre de dos mil siete al quince de abril de dos mil nueve, así como intereses

moratorios de [REDACTED]

[REDACTED] M.N.) generados del dieciséis de abril de dos mil nueve al siete de abril de dos mil catorce, arrojando un total adeudado de

[REDACTED] M.N.). - - - No es óbice mencionar, que el estado de cuenta certificado tiene pleno valor probatorio por haber sido expedido por un contador facultado por la institución bancaria identificada en líneas que anteceden, ya que así lo tiene previsto el artículo 68 de la Ley General de Instituciones de Crédito. - - - Al respecto, también se actualiza la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Novena Época.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Marzo de 1997. Materia: Civil. Página: 277, intitulada: **‘CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR EL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN**

**NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO
(ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE**

CRÉDITO).’ - - - *Por lo que en todo caso, le correspondía al demandado demostrar la inexistencia tanto del adeudo como de los intereses ordinarios y moratorios, por haberlos pagado parcial o totalmente, y no a la acreditante, porque el valor probatorio de la certificación se presume, según dicho precepto, salvo prueba en contrario. - - - Luego, atendiendo al principio de congruencia que debe regir en las resoluciones judiciales es patente que en la especie se encuentra debidamente justificado que los deudores mantienen el adeudo que se señaló en el escrito inicial de demanda derivado del crédito que les fue otorgado. - - - Tampoco puede perderse de vista, que la suerte principal identificada como prestación “B” del escrito inicial de demanda no es la prestación principal impetrada a la que deberían seguir en su suerte el resto de las prestaciones exigidas, sino el vencimiento anticipado del contrato base de la acción (prestación A) debido al incumplimiento de las obligaciones contraídas por los*

acreditados, de tal forma es indispensable que se aborde el estudio de la acción real hipotecaria consistente en el vencimiento anticipado del contrato base de la acción, ante el incumplimiento de pago por parte de los obligados desde el mes de octubre de dos mil siete, así como con el contenido de la escrito de contestación del demandado y las excepciones que opuso de su parte, valorando las pruebas ofrecidas por las partes en su conjunto a la luz de las reglas de la lógica y de la experiencia, decidiendo desde luego todos los puntos litigiosos que fueron expuestos. - - - También trasciende la particularidad de que la codemandada [REDACTED] [REDACTED] se constituyó en rebeldía, misma que fue declarada por auto de doce de diciembre de dos mil catorce (foja 159) teniéndose por presumiblemente confesados los hechos de la demanda en su perjuicio. - - - Bajo esa tesitura y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 281 y 282 del Código Adjetivo Civil les corresponde a las partes el deber procesal de acreditar los hechos constitutivos de sus respectivas pretensiones, por

MONEDA

NACIONAL, que se depositará en la cuenta número

_____ con clave interbancaria número

_____, del banco _____

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO _____ y a favor

del señor _____

B) La cantidad de _____

_____ *PESOS MONEDA NACIONAL*,

que se depositará en la cuenta número

_____, con clave interbancaria número

_____, del banco _____

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO _____ y a favor

del señor _____ de la que es

titular 'EL ACREDITADO' y de igual forma podrá

recibir directamente de 'LA ACREDITANTE', en caso

de imprevistos, el importe de la disposición del

crédito, firmando pagarés y todo tipo de documentos

que acusen el recibo de las mismas. **Para**

documentar las disposiciones del presente

crédito, 'EL ACREDITADO', suscribirá pagares u

otros documentos, a favor de 'LA ACREDITANTE',

a satisfacción de la misma por el importe total del crédito, los cuales deberán reunir las características establecidas en el artículo ciento setenta de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito (sic) y su entrega no se considera como pago, ya que la suscripción de estos solamente documentan la disposición realizada al amparo del presente contrato.’ - - - Atendiendo al sentido literal del clausulado transcrito en líneas que anteceden, de manera conjunta con el contenido del pagaré y de la certificación contable, en opinión de este Tribunal es claro que sí le fue entregado el monto total del crédito al demandado, pues desde que se dijo que, para documentar las disposiciones del crédito, ‘EL ACREDITADO’, suscribiría pagarés u otros documentos, a favor de ‘LA ACREDITANTE’, a satisfacción de la misma por el importe total del crédito; siendo que en la especie según lo reconoció el obligado, firmó el contrato y el referido título de crédito, entonces es evidente que se observó cabalmente la mecánica prevista por las partes para justificar la entrega de los recursos solicitados al ‘acreditado’, máxime que ello fue con posterioridad

corroborado por la certificación contable; esto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1832, 1851, 1856, 1858 y 1859 del Código Sustantivo Civil.

*- - - En ese contexto, el empleo de la expresión ‘podrá disponer del importe del crédito concedido con posterioridad a la firma del presente contrato’; contrario a lo que se indicó, no tiene el significado que le atribuyó el demandado, en el sentido de que sólo fue una expectativa que no llegó a materializarse, puesto que firmó el pagaré con la finalidad de documentar la entrega de los recursos en cuestión, amén de que si también se obligó a liquidar el adeudo en dieciocho meses contados a partir de la firma de la escritura, es porque sí recibió la totalidad del crédito dispuesto. - - - Ahora bien, para acreditar su postura el codemandado ofreció como pruebas de su parte, **la confesional judicial** espontánea de su adversaria, relativa a todas las manifestaciones que hizo en todas y cada una de sus promociones y comparecencias que consten en el expediente y en lo que favorezcan al demandado; **la documental pública**, consistente en el contrato de apertura de*

crédito base de la acción de la actora; la confesional de la actora; la instrumental de actuaciones; y, la presuncional legal y humana. - - - Una vez valorado en su conjunto el referido material probatorio acorde a las reglas de la lógica y de la experiencia previstas en los artículos 402 y 403 del Código Adjetivo Civil, esta Alzada arriba a la conclusión que ningún beneficio le reportan al oferente, ni constituyen las pruebas idóneas para justificar la premisa substancial de que el enjuiciado en ningún momento dispuso del supuesto crédito, o bien, que nunca se le hizo entrega de alguna cantidad de dinero; pues como ya se ha demostrado en líneas que anteceden en la especie se demostró una cosa distinta, en ese tenor, en realidad todo lo manifestado por la enjuiciante prueba en contra del obligado, ya que aquélla parte fue por demás categórica al exigirle el cumplimiento puntual del crédito que en su momento le otorgó. - - - Comparte idénticas consideraciones jurídicas, el contenido integral del convenio básico, cuyo análisis ya se abordó en el presente capítulo, y por esa razón, no le asiste razón al demandado al aseverar

*que de dicho contrato no se desprende alguna evidencia sobre la disposición del crédito. - - - En lo atinente al resultado que reportó la prueba confesional de la actora, desahogada en la audiencia celebrada el tres de febrero de dos mil quince, tampoco le reporta cierto beneficio al oferente, porque aun cuando se le declaró fíctamente confesa de las posiciones que previamente fueron calificadas de legales, de las mismas sólo se corrobora lo atinente a la celebración del contrato de apertura de crédito ante fedatario público: y, quién ostenta la titularidad de los derechos crediticios; más no así, algún otro reconocimiento que pudiera beneficiar al enjuiciado. - - - Por lo que corresponde a la **instrumental de actuaciones**; en opinión de este Tribunal, en realidad le reporta un resultado adverso al oferente, dado que en ese material se encuentran incluidos el contrato de apertura de crédito; el pagaré; el certificado contable; así como la contestación a la demanda; donde con toda nitidez se encuentra debidamente identificado tanto el crédito conferido; la disposición del mismo por parte*

del acreditado; los intereses ordinarios y moratorios; pero sobre todo, el reconocimiento expreso y categórico del obligado en relación de que suscribió y participó en los instrumentos basales. - - -

*Finalmente, la **presuncional legal y humana**; no le reporta algún beneficio al interesado, pues como ya se ha demostrado en líneas que anteceden, la actora a través de los elementos que desahogó sí logró acreditar que el demandado dispuso del crédito y se obligó a liquidarlo en los términos asentados en el contrato basal, lo cual, no es susceptible de desvirtuarse a través de simples conjeturas. - - -*

Apoya lo anterior, el criterio de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quinta Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: XXXIV. Página: 1205, que refiere lo siguiente:

*- - - **‘PRUEBAS PRESUNTIVAS.’** (Se transcriben datos de localización y texto). - - - Por tanto, resulta procedente entrar al estudio del capítulo de excepciones que hizo valer el demandado en su contestación a la demanda, en particular la de **falta de acción y carencia de derecho** del actor, que*

según se hizo consistir, en que no probó que el obligado hubiera efectuado las disposiciones del crédito, amén de que el simple (sic) contrato de apertura básico y su respectivo estado de cuenta no resultan suficientes para acreditar la utilización del crédito, amén de que la suscripción del pagaré tampoco constituye una prueba fehaciente de la disposición de los recursos controvertidos; es infundada, pues como también en este aspecto ya se ha demostrado a lo largo del presente considerando, en la especie, la enjuiciante con los elementos aludidos sí logró justificar los extremos de su acción.

*- - - Al respecto, se actualiza la **jurisprudencia** del QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Octava Época.*

Fuente: Apéndice de 1995 Tomo IV, Parte TCC.

Materia: Civil. Página: 455, que refiere lo siguiente:

*- - - **‘TÍTULO DE CREDITO, NO DESNATURALIZA SU CARÁCTER DE, LA EXCEPCIÓN PERSONAL RELATIVA A QUE FUE SUSCRITO EL DOCUMENTO EN GARANTÍA DE UN ADEUDO, SI EL DEUDOR NO PROBÓ QUE CUMPLIÓ CON SU***

OBLIGACIÓN.’ (Se transcriben datos de localización y texto). - - - Por tanto, si desde el particular punto de vista del demandado el pagaré sólo sirvió para documentar el **‘supuesto adeudo contraído en el contrato principal’**; en opinión de este Tribunal es claro que la defensa que se analiza es infundada, porque se parte de una ponderación aislada de dicho título de crédito sin contrastarlo con el contenido del contrato basal y con el certificado contable; los cuales, como ya se ha demostrado, sí ponen de relieve la disposición del crédito por parte del obligado. - - - La excepción que se denomina de nulidad por falsedad, es infundada, ya que el enjuiciado insiste en señalar que la actora no justificó que le entregó el monto del crédito porque en la cláusula segunda del contrato basal se empleó la expresión “podrá disponer” con posterioridad a la firma del convenio con la conformidad de la acreditante; empero como dichas particularidades ya se encuentran debidamente analizadas en este fallo, no es dable formular un nuevo pronunciamiento. - - - La defensa de nulidad del contrato de apertura de

crédito, basada en que dicho acuerdo de voluntades contiene cláusulas que contrarias a las normas establecidas por preceptos de interés público; es infundada, ya que el enjuiciado de ningún modo identifica cuál es el marco normativo que supuestamente es de interés público y que es adverso a la voluntad de los interesados contenida en el contrato básico. De igual modo, lo alegado en relación de que no se fijó la porción de la cual respondería cada finca hipotecada (sic); es infundado ya que en el contrato básico en su cláusula octava, al referirse a los bienes otorgados en garantía, con toda nitidez, se acordó que la hipoteca comprendería todo cuanto corresponda de derecho a los inmuebles hipotecados, sin reserva ni limitación alguna, de acuerdo con los artículos 2896 y 2897 del Código Civil, por lo que acorde a la voluntad expresa de las partes, no era indispensable que se fijara una porción sobre cada finca, ni tampoco el valor real de cada una de ellas, toda vez que nuestra legislación no le exige de esa manera. - - - Sobre la cantidad que garantizarían los bienes hipotecados, tampoco existe

cierta imprecisión pues con toda nitidez en el contrato del crédito se especificó cuál era la porción sobre la que responderían (v. cláusula Octava), por lo que es claro que sí existe la identificación precisa del valor que garantizan los bienes otorgados en garantía, esto con fundamento en los artículos 2893 y 2896 del Código Civil. - - - En mérito de lo hasta aquí expuesto, es evidente que lo concertado por los contendientes no es nulo de pleno derecho ni transgrede disposiciones de orden público, como erróneamente se pretendió establecer, máxime que ello se hace valer después de haber aprovechado en su totalidad de los efectos del convenio tachado de nulo, y por esa razón, el criterio federal que transcribe el demandado no resulta conculcado en su perjuicio. - - - La defensa de la improcedencia de la vía sumaria civil; es infundada, pues según se ha demostrado en líneas que anteceden, así lo declaró el juez natural. - - - La excepción de incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte del demandante; es infundada, ya que el enjuiciado insiste en señalar que en ningún momento recibió el

monto del crédito, particularidad que ya se encuentra debidamente dilucidada en la presente sentencia, motivo por el cual, no es dable efectuar un nuevo pronunciamiento. - - - Comparte idénticas consideraciones jurídicas, la defensa de falta de acción y carencia de derecho para solicitar el pago de intereses moratorios, puesto que el demandado vuelve a señalar que en ningún momento recibió el monto del crédito, amén de que no hubo incumplimiento de su parte; pero todo ello sin acreditarlo. - - - También comparte los mismos razonamientos, la excepción de de (sic) falta de acción y carencia de derecho; pues el demandado insiste en esbozar que la actora no puso a su disposición el crédito ni manifestó si fue dispuesto por el obligado, amén de que tampoco acreditó que le entregó los cheques correspondientes; particularidad que de igual modo, ya fue analizada por este Tribunal por lo que no es dable abordar nuevamente su análisis, y por ese motivo, el criterio federal que transcribe tampoco le beneficia.- - - La defensa de falta de acción y carencia de derecho

basada en la particularidad de que la actora ([REDACTED] [REDACTED] S.A.) no es una institución de crédito (sic); es infundada, pues es un hecho por demás notorio para este Tribunal que la enjuiciante sí forma parte del sistema bancario mexicano, y si a ello se adiciona la circunstancia de que el contador público en su certificado contable con toda nitidez asentó que fue: ‘...designado por [REDACTED] [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED] DIVISIÓN FIDUCIARIA...’, para elaborar las estimaciones que rindió; entonces es claro que sus argumentos son infundados, sin que sea óbice mencionar que las tasas de interés que se tomaron en cuenta, fueron las que expresamente se autorizaron en el contrato de apertura de crédito (TIE) según se advierte del contenido de la estipulación Cuarta, por lo que si desde el particular punto de vista del enjuiciado, se aplicaron “diversos instrumentos” (sin identificar cuáles), y que era indispensable evidenciar de dónde y cómo se obtuvieron, también es infundado, pues el contador público aludido con toda nitidez expresó la

manera en que obtuvo el saldo a su cargo, así como la forma en que aplicó los intereses concertados. - - -

Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Octubre de 2000.

Materia: Civil. Página: 1097, que refiere lo siguiente:

- - - ‘CERTIFICADO DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO. NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE LAS PUBLICACIONES OFICIALES EN DONDE APAREZCAN LAS TASAS QUE SE APLICARON EN LA CUANTIFICACIÓN DE LOS INTERESES.’ (Se transcriben datos de

localización y texto). - - - No es óbice mencionar, que por los motivos identificados en líneas que anteceden, la tesis federal aislada que transcribe el demandado en apoyo de su postura, no resulta conculcada en su perjuicio, máxime que no constituye un criterio obligatorio para este Tribunal.

- - - Comparte idénticas estimaciones jurídicas, la defensa de falta de acción y carencia de derecho de la actora, en relación de que la certificación contable

no justifica las disposiciones; que no explica qué operaciones aritméticas realizó el contador para llegar a su conclusión de que se adeudan intereses ordinarios y moratorios; que no estableció un procedimiento contable pertinente para establecer el quantum de los intereses ordinarios; que la certificación no refiere qué tipo de interés es el que precisa; qué organismo determinó la tasa de interés; que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito no establece ni faculta al contador para certificar cuáles son el monto de la tasa de interés que mensualmente prevalece en el mercado de dinero; y que el actor tenía la obligación de acreditar con documentos idóneos la veracidad de las tasas de interés; pues como ya se ha evidenciado en líneas que anteceden, en realidad la certificación contable exhibida como instrumento básico no requiere la observancia de las particularidades que invoca el enjuiciado, antes bien, de su simple lectura se advierte que con toda nitidez se identificó el monto del capital dispuesto, las tasas de interés, así como los mecanismos que se emplearon para obtener el

saldo a cargo del obligado, por lo que debe reiterarse que si el demandado estimaba que los datos contenidos en el estado de cuenta, en relación con las tasas que se aplicaron para la cuantificación de los intereses reclamados, eran incorrectos, a él le corresponde aportar las pruebas conducentes a fin de destruir la presunción legal establecida en el precepto en comento. - - - La excepción de falta de acción y carencia de derecho de la actora para demandar el pago de accesorios atento al principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, si ni justificó las disposiciones de las cantidades que se le reclamaron, y que era a su cargo al menos justificar el cobro de intereses; es infundada, pues también constituye un tópico al que se da respuesta integral a través de los razonamientos jurídicos expuestos a lo largo de este capítulo, sin que sea óbice mencionar, que en la demanda (hecho 11) sí se especificó el momento en que los demandados incurrieron en mora y el por qué se exigió el vencimiento anticipado de lo concertado, motivo por los cuales los criterios federales que se transcriben

no resultan transgredidos en perjuicio del enjuiciado.

- - - La defensa de falta de acción y carencia de derecho, es infundada, ya que el demandado insiste en señalar que la disposición del crédito no quedó acreditada y que al no quedar justificada dicha premisa no hubo incumplimiento de su parte; sin embargo, como ya se ha explicado, no es dable abordar el análisis de dicha particularidad pues a través de los argumentos expuestos en líneas que anteceden, se da respuesta integral a dicha excepción. - - - Sobre la cuestión de competencia, tampoco se hace un nuevo pronunciamiento pues la misma, según se ha demostrado, en su oportunidad fue declarada infundada por este Tribunal. - - - Comparte idénticas consideraciones la excepción de falta de legitimación activa y pasiva, pues a través de los instrumentos que la actora ofreció como pruebas de su parte con toda nitidez se corrobora el interés jurídico que tiene sobre el crédito controvertido, motivo por el cual de ningún modo se le puede estimar como una persona extraña, amén de que el hecho de que el contrato básico en un inicio lo

hubiera celebrado con una empresa distinta, ello no excluye la participación de la enjuiciante en el proceso de origen, máxime si se toma en cuenta, que en su oportunidad le fue debidamente notificada la cesión del crédito al obligado, por tanto, si desde el particular punto de vista del demandado su crédito no fue objeto de cesión, entonces es claro que la defensa en comento, es infundada, ya que en la especie el enjuiciado con toda nitidez reconoció tanto la suscripción del contrato de apertura de crédito como del título de crédito a través del cual se documentó la disposición de esos recursos. - - - La defensa de falta de legitimación relativa a que el demandado en ningún momento fue debidamente notificado en tiempo y forma por el cedente o cesionario de los derechos de crédito, y que por ende no existe ningún derecho para que se le reclame el pago de las prestaciones exigidas en el escrito inicial de demanda, amén de que no recibió cantidad alguna de dinero derivada del contrato de apertura de crédito; es infundada, pues dichos planteamientos ya fueron motivo de un exhaustivo análisis por parte de

este Tribunal, motivo por el cual no es dable emitir un nuevo pronunciamiento, sin que sea óbice mencionar, que por esa razón el marco legal y las tesis federales que se transcriben no resultan trastocados en perjuicio del demandado. - - - En tales circunstancias, al evidenciarse lo fundado de los motivos de disenso atendidos, lo procedente es revocar el veredicto apelado con fundamento en el artículo 688 del Código Adjetivo Civil, para quedar íntegramente como se indica a continuación: - - -

***‘PRIMERO.-** Ha procedido la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA en donde la parte actora [REDACTED]*

S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO

*[REDACTED] **DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU***

CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO

IRREVOCABLE DE GARANTÍA IDENTIFICADO CON

EL NÚMERO** [REDACTED] **acreditó su acción, y los

codemandados** [REDACTED] **no acreditó sus

***excepciones y defensas, y la señora** [REDACTED]*

[REDACTED] se constituyó en rebeldía, en consecuencia. - - -

***SEGUNDO.-** Se declara el vencimiento anticipado del*

plazo estipulado en el Contrato de Apertura de Crédito

Simple con Interés y Garantía Hipotecaria contenido en el instrumento [REDACTED] pasado ante la fe del Notario Público

*[REDACTED] del Distrito Federal. - - - **TERCERO.-** Se condena a los enjuiciados [REDACTED]*

[REDACTED], para que paguen a la parte actora o a quien sus derechos represente, la cantidad de \$ [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] PESOS, 00/100

M.N.), por concepto de capital vencido y suerte principal,

en términos del Estado de Adeudo expedido por el

Contador Público Certificado facultado por la actora, y de

conformidad con lo pactado en el contrato base de la

*acción. - - - **CUARTO.-** Se condena a [REDACTED]*

[REDACTED] y [REDACTED] para que paguen a la

parte actora o a quien sus derechos represente la cantidad

de \$ [REDACTED]

[REDACTED] PESOS, [REDACTED]/100 M.N.)

por concepto de intereses ordinarios generados al siete de

abril de dos mil catorce, más los que se sigan causando

por ese concepto, conforme a lo pactado en el contrato

base de la acción y en el Estado de Adeudo expedido por el

Contador Público Certificado facultado por la actora, los

que se cuantificarán en ejecución de sentencia. - - -

QUINTO.- Se condena a [REDACTED] y

[REDACTED] para que paguen a la parte actora o a quien sus derechos represente la cantidad de

[REDACTED]

[REDACTED] **PESOS,** [REDACTED] /100

M.N.) por concepto de intereses moratorios calculados al siete de abril de dos mil catorce, y hasta la fecha en que se liquide el adeudo, conforme a lo pactado en la cláusula Quinta del contrato base de la acción y en la certificación contable, lo que se cuantificará en ejecución de sentencia.

- - - **SEXTO.-** Se condena a [REDACTED]

[REDACTED] y [REDACTED] al pago de costas generadas en esta primera instancia, con

fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 fracción III del Código de Procedimientos Civiles,

mismas que se cuantificarán en ejecución de sentencia. - - - **SÉPTIMO.-** Sáquese copia autorizada

de la presente resolución y glósese en el legajo de sentencias correspondiente. - - - **OCTAVO.-**

NOTIFÍQUESE.' - - - **III.-** Al no encontrarse el presente asunto comprendido en alguna de las

hipótesis legales contempladas en el precepto 140 de la ley procesal precitada, no se hace especial condena en costas en esta segunda instancia.”

V.- Los conceptos de violación, son del tenor siguiente:

“I.- Como concepto de violación en perjuicio del suscrito; el que la Autoridad Inferior haya dictado una sentencia sumamente repetitiva y contradictoria; sin llegar a una conclusión clara, precisa y congruente, violando el derecho humano consagrado en los artículos los artículos 14, 16 y 17 Constitucional, porque la sentencia emitida por la Inferior, no fue conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, violando en mi perjuicio el principio de motivación de las sentencias, en donde las resoluciones judiciales deben estar fundadas y motivadas; y tan es así, que en la sentencia que se combate en su foja 9, último párrafo, señala: “... nada tiene de “infundado” el hecho de que el Juez del primer grado abordara el análisis de lo previsto en el ordinal 2033 del Código

Sustantivo Civil...", y enseguida pasa a transcribir los artículos 2033 y 2036 del Código Civil, manifestando después que es acorde observar la norma 2036 y no ser óbice el observar lo que dispone el artículo 2033; entonces en ese contexto, la Autoridad Responsable le da la razón al Juez Natural, y por consiguiente al suscrito; al manifestar que la actora no acreditó los requisitos de procebilidad de su acción, porque no dio debido cumplimiento a lo previsto por el artículo 2036 y en consecuencia, no cumplió con lo dispuesto por la última parte del artículo 2033 del Código Civil, entonces, ¿cumplió o no cumplió la actora con dichos preceptos legales?, en esta parte estriba la incongruencia de la Autoridad Responsable, porque posteriormente señala: "... que no era indispensable que tanto la cesión del crédito litigioso como la notificación a los obligados constara en escritura pública, por constituir un caso de excepción a que alude el artículo 2926 de la legislación en consulta ...", interpretación totalmente errónea que hace la Responsable, a dicho artículo, pues solo transcribe parte del mismo, pero no toma en cuenta el

*contenido total de dicho ordenamiento legal y que a la letra dice: - - - **Artículo 2926.- (se transcribe).** - - -*

En este contexto, se tiene que el primer párrafo del artículo en comento, señala; 'El crédito puede cederse, en todo o en parte, siempre que la cesión se haga en la forma que para la constitución de la hipoteca previene el artículo 2,917, se dé conocimiento al deudor y sea inscrita en el Registro'; el artículo es muy claro, porque obliga al Cesionario a que me notifique que mi crédito ha sido cedido; y, a que dicho crédito sea inscrito en el Registro Público, y además que el mismo conste en escritura, requisito sine quanon que debió integrarse, pero que en procedimiento no se contempló porque no se llevó a cabo debiéndose apreciar esta obligación legal, y resulta que la actora no cumplió con estas principales obligaciones; para que tuviera derecho a demandarme; aunado a ello, el artículo 2926, nos remite al artículo 2917 del Código Civil, y que tampoco tomo en cuenta el Tribunal de Alzada, que a la letra dice: 'Para la constitución de créditos con garantía hipotecaria se observarán las formalidades

establecidas en los artículos 2317 y 2320", y en especial el artículo 2317 en su parte conducente señala " ... y la constitución o trasmisión de derechos reales estimados hasta la misma cantidad o que garanticen un crédito no mayor de dicha suma, podrán otorgarse en documento privado firmado por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas se ratifiquen ante Notario, Juez competente o Registro Público de la Propiedad ... ", en consecuencia y por lógica, tal y como lo señala el artículo 2033 del Código Civil en su último párrafo, y que la actora no dio el debido cumplimiento, porque la ley así lo exige, que mi título del crédito cedido debió constar en escritura pública, cosa que no sucedió, porque la actora simplemente no quiso dar cumplimiento a dicho artículo, aunado a que como lo manifesté en mi contestación a la demanda y bajo protesta de decir verdad que nunca fui notificado, o se me dio conocimiento de que mi crédito había sido cedido a otra Institución, y si bien es cierto que mi contraria exhibió una supuesta carta de notificación y requerimiento de pago, esta si fue debidamente

objetada, que como punto de violación constitucional hago valer más adelante; por tanto, lógica y jurídicamente la cesión debió hacerse en esa clase de documento; por consiguiente, el Tribunal de Alzada, no puede pasar por alto, el darse el debido cumplimiento a los artículos 2033 y 2036 del Código Civil; lo que se traduce, a que el CESIONARIO, no tiene legitimación para demandarme el pago de un crédito hipotecario, si previamente no me notificó por escrito la cesión en la forma formal debidamente requisitada, y máxime que dicha cesión no fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad como lo ordena la ley; (entre otras irregularidades legales) porque los casos de excepción a que alude la tesis que invoca la Responsable, se refieren a endosos del título, y en el caso que nos ocupa, no se trata de un endoso en título, sino de una cesión de un crédito; por tanto, no hay excepción a la regla, como lo manifiesta la Autoridad hoy Responsable, y a mayor abundamiento el artículo 2317, es claro al precisar que al tratarse de un derecho real, cuyo valor no exceda al equivalente a trescientas sesenta y cinco

veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente en el momento de la operación, la transmisión de derechos reales debe otorgarse en documento privado firmado por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas se ratifiquen ante Notario, Juez competente o Registro Público de la Propiedad; lo que la autoridad hoy responsable dejó de cumplir al emitir su resolución por su falta de estudio y aplicación legal, sirviendo de apoyo a mi dicho los siguientes criterios emitidos por nuestro máximo Tribunal: - - - 'IMPROCEDENCIA DE LA VÍA SUMARIA HIPOTECARIA CUANDO EL CONTRATO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA NO ESTÁ CONTENIDO EN ESCRITURA PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).- (se transcriben datos de localización y texto). - - - 'CESIÓN DE DERECHOS, NOTIFICACIÓN AL DEUDOR, EN CASO DE.' (Se transcriben datos de localización y texto). - - - 'VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. PARA QUE PROCEDA, EN CASO DE EXISTIR CESIÓN DE DERECHOS DEL CRÉDITO RELATIVO, ES NECESARIA LA

PREVIA NOTIFICACIÓN AL DEUDOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2926 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE ANTES DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MAYO DE 1996.’ (se transcriben datos de localización y texto). - - - II.- Como concepto de violación, la violación al derecho humano, consagrado en los artículos 1°, 16 Y 17 20 Constitucional, en donde la Autoridad hoy Responsable, no funda ni motiva la causa legal de su actuar, así como el principio de igualdad procesal, en donde las partes deben gozar de igualdad de oportunidades para la demostración de sus pretensiones, excepciones y defensas, pero una igualdad real y no teórica, lo que implica la posibilidad de que se prevean normas que privilegien los derechos procesales de la parte débil o que obliguen al juez a realizar conductas en su apoyo; porque en la sentencia que se combate, a foja 13, párrafo tercero, manifiesta que el suscrito, no objetó las cartas de notificación personal al suscrito, cuando

en mi contestación al hecho 15 de la demanda consta dicha objeción, y si bien manifesté que las mismas no obraban en el cúmulo de traslado, de cualquier forma era mi obligación el objetarlas, ya que mi contraria hizo énfasis en dichas cartas, y sin embargo el Tribunal de Alzada, posteriormente reconoce que sí realice (sic) hice tal objeción; objeción que no se tomó en cuenta, independientemente, de que a las cartas dejó la autoridad responsable de darles un justo valor probatorio en el sentido de que las cartas por la forma y contenido y la práctica sobre ellas, no se realizaron conforme a las normas del procedimiento y con las formalidades que ameritan el caso, como lo hará valer en concepto de violación numéricamente aparte, porque no son básicas para tomarse en cuenta para lo cual fueron propuestas por estar incompletas y mal llevadas, violando nuevamente en mi perjuicio el derecho humano consagrado en el artículo 14 Constitucional, ya que la Autoridad Responsable no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas; porque

flagrantemente violó en mi perjuicio los artículos 2033 y 2036, 2917, 2926 del Código Civil, así como el 335 del Código de Procedimientos Civiles, máxime, que en mi escrito de contestación a la demanda hice valer el incidente de nulidad de emplazamiento, y sin embargo el Inferior manifiesta que no lo hice valer en tiempo y forma; pero al referirme los artículos 2033 y 2036 del Código Civil del Distrito, que exigen que para que el cesionario pueda ejercer sus derechos, al tratarse de derechos reales, derivados de una hipoteca, rige el artículo 2926 del ordenamiento legal, que dispone que el crédito puede cederse en todo o en parte, siempre que la cesión se haga en la forma que para la constitución de la hipoteca previene el artículo 2917, se dé conocimiento al deudor y sea inscrita en el registro; porque como ya se dijo y demostró, para que el cesionario que adquiera un crédito garantizado con hipoteca, pueda ejercer en contra del deudor, las acciones personal y real, derivadas respectivamente del crédito y de la hipoteca, es necesario que previamente notifique la cesión a dicho deudor y la inscriba en el Registro

Público de la Propiedad; porque como consta de autos, la cosa hipotecada ha pasado a poder de un tercero, y en consecuencia es necesario que la cesión del crédito hipotecario, primordialmente conste y sea inscriba en el registro, porque sucede que al tratarse de derechos reales, puede no exigirse la notificación personal al deudor, pero indiscutiblemente sí debe ser inscrita en el registro público, y esto jamás sucedió; por tanto la acción real, proveniente de la hipoteca que grava el inmueble, y con la cual ha pasado al dominio de un tercero, como lo señala el artículo 2894 del Código Civil, los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto, aunque pasen a poder de un tercero; y como es de verse en constancia de autos, el crédito hipotecario cedido, no consta en escritura pública, ni mucho menos en el Registro Público de la Propiedad, es por ello que se violaron en mi perjuicio las normas esenciales de procedimiento, con ello los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna. Sirviendo de apoyo, el siguiente criterio jurisprudencial: - - - 'VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA.

PARA QUE PROCEDA, EN CASO DE EXISTIR CESIÓN DE DERECHOS DEL CRÉDITO RELATIVO, ES NECESARIA LA PREVIA NOTIFICACIÓN AL DEUDOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3305 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA.’ (Se transcriben datos de localización y texto). - - - Por consiguiente, la Autoridad Responsable, pasa por alto, que la base de la acción de la hoy tercera interesada, se trata de un derecho real, y por ende debe constar en el Registro Público de la Propiedad, porque la base del juicio especial hipotecario radica en que se cumpla con los requisitos del artículo 468 del Código de Procedimientos Civiles, porque al existir una garantía hipotecaria que se ha constituido en un documento, conforme al segundo párrafo del artículo citado, para que proceda el juicio en la vía especial hipotecaria es requisito indispensable, que el crédito conste en escritura debidamente registrada; y esto no sucedió en el asunto que nos ocupa; es por ello que se viola en mi perjuicio el artículo 14 y 16 Constitucional, en el que se consagran derechos humanos y las normas

esenciales del procedimiento. - - - De ahí que, suponiendo sin conceder, que la tercera interesada, haya cumplido con la notificación,(que no es el caso) prevista por la ley, al suscrito; esto no quiere decir que tenga por cumplida la base legal, y prospere su acción, porque le faltó cumplir con lo primordial, al tratarse de un derecho real, que es, que el crédito esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad, y por ende conste en escritura pública, cosa que no sucedió, como se encuentra demostrado en autos.

- - - III.- Como concepto de violación; la indebida aplicación del principio dispositivo, en donde el juez tiene vedado tomar iniciativas encaminadas a iniciar el proceso y a establecer la verdad (las pruebas) para averiguar a qué parte asiste la razón en su afirmación de los hechos; por la inexacta aplicación de los artículos 110, 116, 402 Y 403 del Código de Procedimientos Civiles, por no aplicarse la certeza jurídica, de lo actuado, lo valorado en prueba y lo resuelto en la misma, refiriéndome concretamente a las cartas de notificación de fecha 25 de agosto de 2014, supuestamente firmada por el suscrito; y la

Autoridad hoy Responsable les da plena validez, y se basa en ellas para que considere, que la parte actora justificó haber cumplido con la notificación obligatoria a que se encontraba, para que prosperara su acción, y la realidad de las cosas, es que la Autoridad hoy combatida en su resolución, pasa por alto lo siguiente: La suscribe el Licenciado José Luis Oseguera Maximiliano; en su carácter de Apoderado Legal de la Sociedad denominada Sendere, S.A. de C.V., que a su vez es apoderada de [REDACTED] S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO [REDACTED] DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO, en este primer punto, no toma en cuenta la certeza jurídica, porque el profesionalista se dice ser apoderado de una persona moral, y que a su vez de una Institución de Crédito; pero en qué momento la hoy Responsable valoró este documento en cuanto a su contenido, yo como tengo la seguridad y certeza, que lo que se me está dando a conocer sea verídico y legal, porque la carta, no me exhibe, ni me anexa documentos legales que acrediten el dicho del profesionalista, como puedo

estar yo seguro de lo que supuestamente recibí, y que esté plenamente justificado, y que me pueda parar perjuicio; y no sé, si se está cumpliendo con un requisito legal o que fundamento está cumpliendo la susodicha notificación, violentándome la realidad jurídica, en la cual, como ciudadano le pueda dar validez legítima con consecuencias jurídicas, valores que la autoridad hoy Responsable dejó de apreciar sobre esta documental privada, que como simple carta incluso, suponiendo sin conceder, la recibí en el supuesto caso, de una persona moral de la cual no tengo relación jurídica alguna, y ni la conozco; violentándome en no cumplir con los requisitos dicha carta de notificación, la forma extrajudicial en contexto que debió haberse realizado, y que debí tener pleno conocimiento, teniendo una simple consideración en donde aparece únicamente mi nombre, desconociendo en forma total, motivo o razón por el cual me la estaban haciendo llegar, y que me parara perjuicio en forma posterior. La citada carta de fecha 25 de agosto de 2014, menciona antecedentes, en el número 1, se refiere a Crédito

Inmobiliario, S.A. de C. V., SOFOM E.N.R. de una dación en pago con Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo y Sociedad Hipotecaria Federal, Institución de Banca de Desarrollo, encontrándome ante dos entes jurídicos diferentes a los dos nombrados anteriormente, acrecentándome la incredibilidad de dicha carta la cual no se le dio el justo valor probatorio; por la Autoridad Responsable, violentándome la certeza jurídica con el debido proceso, como es posible que le den valor probatorio a una carta a la cual en su momento de emisión y pretender justificar el actuar de la misma, se haya realizado, con falta de orden y documentación, que avalasen lo que ahí consta, por lo que la certidumbre a que tengo derecho, de que se me respete y prevalezca, no fue considerada legalmente; no basta hacer la notificación en forma unilateral o simple; sino que debe estar compuesta por los elementos de credibilidad que la misma debe de contener, hay que recordar que con estos entes jurídicos, yo no tuve contacto ni judicial ni extrajudicialmente situación que

la responsable dejó de apreciar y valorar, al darle el valor probatorio en la sentencia que se combate en su foja 16, párrafo tercero, y por consecuencia en forma indebida la Responsable, fundó y motivó una resolución, sin respetar las normas esenciales del procedimiento y la valorización de la prueba contumaz. Elementos deben imperar, el deber de actuar con tal exhaustividad que la notificación que se exhibe revele tanto las circunstancias exactas bajo las cuales se cumpla determinado mandamiento, que aunque no se requiera sea sacramental, si lo suficientemente clara para no forzar el detalle de lo ocurrido, pues en el caso no se tiene certeza jurídica de que se me haya hecho llegar en forma legal junto con los diversos anexos o bien diversos documentos a los que hace alusión dicha carta, que son obligatorios y necesarios para poder entablar una defensa adecuada por parte de la demandada, hoy aquí quejosa. De lo contrario estaré en un completo estado de indefensión. Es por lo que la autoridad inferior, al dictar su sentencia, resolvió en esa instancia que la acción de la actora no se encuentra

justificada legalmente, realzando el valor de mi confesión ante la presencia judicial que el suscrito jamás recibí notificación legal por mi contraria, requisito de prosperidad de su acción y sin esto, no hay nada que discutir. Considerando que la constitución me protege y deba ser amparado para que se deje insubsistente la resolución hoy combatida, y se realice una que respete mis garantías constitucionales. - - - De igual forma la Autoridad hoy Responsable, dejó de aplicar el Principio Pro Persona, consagrado en el artículo primero constitucional, que informa todo el derecho internacional de los derechos humanos, el cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida; respecto a la interpretación de los artículos 2033, 2036 Y 2926 del Código Civil, como preferencia interpretativa, conforme a la cual ante dos o más interpretaciones de la norma válidas y razonables, el intérprete debe preferir la que más proteja al individuo u optimice un

derecho fundamental y, como preferencia normativa, conforme a la cual si pueden aplicarse dos o más normas a un determinado caso, la Autoridad de Alzada, debió preferir la que más favorezca a la persona, para la interpretación de normas con el objeto de establecer el contenido y alcance de los derechos humanos y, de este modo, otorgarles un sentido protector a favor de la persona humana, violentándome, además, mi seguridad jurídica, a que tengo derecho. Poniendo a consideración de este H. Tribunal, los siguientes criterios jurisprudenciales, emitidos por nuestro máximo Tribunal. - - -

‘PRINCIPIO PRO PERSONA COMO CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. TEST DE ARGUMENTACIÓN MÍNIMA EXIGIDA POR EL JUEZ O TRIBUNAL DE AMPARO PARA LA EFICACIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.’

(Se transcriben datos de localización y texto).”

VI.- Los conceptos de violación son en parte infundados y en otra inoperantes, de acuerdo a las consideraciones siguientes.

En efecto, el quejoso afirma que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado violó las formalidades esenciales del procedimiento, con infracción a lo establecido en los preceptos 14, 16 y 17 constitucionales.

Previamente es menester señalar que la sentencia definitiva reclamada en su calidad de acto jurídico unitario *-incluyendo sus resolutivos-*, no puede transgredir las formalidades esenciales del procedimiento, dado que éstas necesariamente constituyen actos anteriores a la emisión del fallo de única instancia.

Lo anterior se afirma, en la medida que esas formalidades resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada de los derechos del individuo, y son la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa así como la oportunidad de alegar.

Así pues, es claro que, las formalidades se desarrollan dentro del procedimiento, por tanto, la violación a las mismas sólo podría acontecer durante su sustanciación, mas no en la sentencia definitiva.

Se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número quinientos ochenta y tres, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, publicada a páginas quinientos veintisiete, del tomo VI, materia común, jurisprudencia TCC, octava época, del Apéndice dos mil, del tenor siguiente:

“SENTENCIA. NO PUEDE ADOLECER, EN SU CARÁCTER DE ACTO JURÍDICO PÚBLICO UNITARIO, DE FALTA DE FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.- A virtud de que las formalidades esenciales en un procedimiento consisten en otorgar en él al interesado las oportunidades de defenderse y de probar lo que a su interés convenga, lo que obviamente debe ocurrir antes de dictarse la sentencia correspondiente, claro resulta que tal

sentencia, en su carácter de acto jurídico público unitario, no puede adolecer de la falta de dichas formalidades.”

En diverso aspecto, argumenta **medularmente** el titular de la acción constitucional que la ad quem se contradice al mencionar en un primer momento que la actora no acreditó los requisitos de procedibilidad de su acción porque no dio cumplimiento a lo dispuesto por el precepto 2036 del Código Civil para el Distrito Federal y en un segundo momento manifiesta que era acorde observar dicha norma.

Que el precepto 2926 del cuerpo legal mencionado en el párrafo anterior, era claro porque obligaba al cesionario a que le notificara que su crédito había sido cedido e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, además de que constara en escritura pública.

Que si bien era cierto que su contra parte exhibió una carta de notificación de requerimiento de pago,

contrariamente a lo sostenido por la ad quem, sí fue objetada, como se desprendía de la contestación al hecho número quince, lo que se traducía en que el cesionario no tenía legitimación para demandarle el pago de un crédito hipotecario.

Que de acuerdo a lo dispuesto por el precepto 2317 de la legislación de mérito, al precisar que al tratarse de un derecho real, cuyo valor no excediera el equivalente a trescientas sesenta y cinco veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente al momento de la operación, la transmisión de derechos debía otorgarse en documento privado, ante Registro Público y en escritura pública; en sustento a lo anterior invocó el criterio bajo el rubro: *“VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. PARA QUE PROCEDA, EN CASO DE EXISTIR CESIÓN DE DERECHOS DEL CRÉDITO RELATIVO, ES NECESARIA LA PREVIA NOTIFICACIÓN AL DEUDOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2926 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE ANTES DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MAYO DE 1996.”*

Que contrariamente a lo sostenido por la ad quem, sí hizo valer el incidente de nulidad de emplazamiento, de ahí que infringió en su perjuicio los preceptos 2033, 2036, 2917 y 2926 del Código Civil para el Distrito Federal, así como el diverso numeral 335 de la legislación procesal de esta Ciudad Capital, que exigían que para que el cesionario pudiera ejercer sus derechos, al tratarse de derechos reales, derivados de una hipoteca, el crédito debía cederse en todo o en parte, siempre que se hiciera en la forma prevista por el precepto 2917 del primer cuerpo de leyes indicado.

Que la carta de notificación exhibida por la parte actora, no tenía la certeza en cuanto a su contenido, y por ende, la seguridad de que lo manifestado en ella fuese verídico, pues en dicho documento solo aparece su nombre, desconociendo en forma total, motivo o razón por el cual se la estaban haciendo llegar.

Que la carta de veinticinco de agosto de dos mil catorce, mencionaba a

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOFOM,

ENTIDAD NO REGULADA, de una dación de pago con SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Y SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, encontrándose ante dos entes jurídicos distintos, acrecentándose la incertidumbre de dicha carta, la cual no se le dio el justo valor probatorio.

Tales motivos de disenso son infundados, porque como acertamente lo consideró la ad quem, era incorrecta la afirmación en el sentido de que el a quo hubiese abordado el análisis de lo previsto en el ordinal 2033 del Código Civil para el Distrito Federal, que dispone que solo cuando la ley exigiera que el título de crédito cedido constara en escritura pública, la cesión debía hacerse en esa clase de documentos, pues lo cierto era, que la enjuiciante fue contundente al aseverar que les notificó a los demandados la cesión del crédito litigioso ante dos testigos, así como la designación de administrador, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2036 del citado cuerpo de leyes, sin embargo, **lo importante era que en el caso, no fue indispensable que tanto la cesión del crédito litigioso como la notificación a los obligados**

constara en escritura pública, por constituir un caso de excepción a que aludía el precepto 2926 de la citada legislación, el cual prescribe que las instituciones del sistema bancario mexicano así como las demás entidades financieras, podían ceder sus créditos con garantía hipotecaria, sin necesidad de notificación al deudor en escritura pública ni de que se inscribiera en el Registro Público, asimismo, en el caso de que el cedente dejara de llevar la administración de los créditos, el cesionario debía únicamente notificar por escrito la cesión al deudor.

Ciertamente, el acto jurídico consistente en el contrato de apertura de crédito simple y garantía hipotecaria, celebrado por [REDACTED] [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en su carácter de acreedor hipotecario (acreditante) y el coenjuciado [REDACTED] [REDACTED] en su carácter de acreditado y garante hipotecario, tuvo verificativo el día quince de octubre de dos mil siete.

Por tanto, la legislación aplicable para tales actos jurídicos es el Código Civil para el Distrito Federal vigente al momento de su celebración; y por ende, no están sujetos a las disposiciones anteriores a las reformas de mil novecientos noventa y seis, a que alude la jurisprudencia que invoca el quejoso, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada como:

“VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. PARA QUE PROCEDA, EN CASO DE EXISTIR CESIÓN DE DERECHOS DEL CRÉDITO RELATIVO, ES NECESARIA LA PREVIA NOTIFICACIÓN AL DEUDOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2926 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE ANTES DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MAYO DE 1996”.

En ese tenor, no es aplicable al caso el artículo 2926 del Código Civil para el Distrito Federal vigente antes de las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, a que alude el referido criterio

jurisprudencial y cuyo contenido se transcribe para efectos ilustrativos:

“Artículo 2926. *El crédito puede cederse, en todo o en parte, siempre que la cesión se haga en la forma que para la constitución de la hipoteca previene el artículo 2917, se dé conocimiento al deudor y sea inscrita en el Registro.- - - Si la hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones a la orden, puede transmitirse por endoso del título, sin necesidad de notificación al deudor, ni de registro. La hipoteca constituida para garantizar obligaciones al portador, se transmitirá por la simple entrega del título sin ningún otro requisito”.*

Del artículo transcrito, en su primer párrafo, se advierte que la cesión de créditos exigía como requisitos, el conocimiento del deudor y la inscripción en el Registro Público.

Pero, de acuerdo con las disposiciones vigentes al momento de la celebración de la cesión del crédito

hipotecario de quince de octubre de dos mil siete, se rige por el artículo 2926 del Código Civil para el Distrito Federal que a continuación se transcribe.

*“**Artículo 2926.** El crédito puede cederse, en todo o en parte, siempre que la cesión se haga en la forma que para la constitución de la hipoteca previene el artículo 2,917, se dé conocimiento al deudor y sea inscrita en el Registro.- - - Si la hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones a la orden, puede transmitirse por endoso del título, sin necesidad de notificación al deudor, ni de registro. La hipoteca constituida para garantizar obligaciones al portador, se transmitirá por la simple entrega del título sin ningún otro requisito.- - - **Las instituciones del sistema bancario mexicano, actuando en nombre propio o como fiduciarias, las demás entidades financieras, y los institutos de seguridad social, podrán ceder sus créditos con garantía hipotecaria, sin necesidad de notificación al deudor, de escritura pública, ni de inscripción en el Registro, siempre que el cedente lleve la***

administración de los créditos. En caso de que el cedente deje de llevar la administración de los créditos, el cesionario deberá únicamente notificar por escrito la cesión al deudor.- - - En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, la inscripción de la hipoteca a favor del acreedor original se considerará hecha a favor de el o los cesionarios referidos en tales párrafos, quienes tendrán todos los derechos y acciones derivados de ésta.”

Del precepto transcrito se advierte una regulación especial en la cesión de créditos hipotecarios cuando intervienen las instituciones del sistema bancario mexicano, porque se les faculta para ceder sus créditos con garantía hipotecaria, sin necesidad de notificación al deudor, de escritura pública, ni de inscripción en el Registro Público, siempre que conserven la administración de los créditos; y para el caso de que dejen de llevar la administración, el cesionario únicamente notificará por escrito la cesión al deudor, y en tal supuesto la inscripción de la hipoteca a favor del acreedor original se considerará

hecha a favor del cesionario; quien tendrá todos los derechos y acciones derivadas de la hipoteca.

Se trata de una norma cuya finalidad fue dar mayor facilidad a la transmisión de los créditos garantizados con hipoteca; puesto que, de conformidad con la exposición de motivos que originó la reforma al Código Civil para el Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, la adición de los párrafos tercero y cuarto del citado artículo 2926, obedeció a que el Gobierno Federal estimó fundamental promover nuevos mecanismos que coadyuvaran a simplificar el incremento de los recursos crediticios que permitieran acceder con más facilidad a un mayor número de mexicanos a una vivienda digna, para lo cual se propuso mediante la inclusión de esos párrafos, facilitar el régimen para la cesión de créditos hipotecarios, a **través de casos particulares en los que no se requiriera de notificación al deudor, de escritura pública y de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, para la realización de la cesión.**

Bajo esta óptica, cuando se trate de negocios en donde las instituciones del sistema bancario mexicano o demás instituciones financieras funjan como cedentes de créditos con garantía hipotecaria, no serán necesarios dichos requisitos cuando éstas conservan la administración de los créditos, dado que en tal supuesto el cesionario se constituye en un mandatario para el cobro.

En cambio, **cuando el cedente deje de llevar la administración de los mismos, el cesionario únicamente deberá notificar por escrito la cesión al deudor.**

Luego, en el contrato de cesión de derechos, en lo que aquí interesa se adujo literalmente lo siguiente:

*“CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE
CRÉDITO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
[REDACTED] [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR*

CONCEPCIÓN MARIBEL CRUZ CRUZ (EN
ADELANTE LA 'CEDENTE' O [REDACTED]
[REDACTED] Y POR LA OTRA PARTE [REDACTED]
[REDACTED] S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO [REDACTED] DIVISIÓN
FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE
GARANTÍA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO
[REDACTED] (EL 'FIDUCIARIO' O EL 'CESIONARIO' Y
DE MANERA CONJUNTA CON [REDACTED]
[REDACTED] LAS 'PARTES'), REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR SU DELEGADA FIDUCIARIA
LICENCIADA [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]; DE CONFORMIDAD CON LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLAÚSULAS, EN EL ENTENDIDO QUE LOS
TÉRMINOS CON MAYÚSCULAS TENDRÁN EL
SIGNIFICADO QUE EN EL PRESENTE CONTRATO
SE LES ATRIBUYE.”

De la carta de veinticinco de agosto de dos mil catorce, destaca lo siguiente.

*“CLÁUSULAS. - - - PRIMERA. CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO. - - - La CEDENTE en este acto cede en favor del FIDUCIARIO, en alcance y regularización del convenio la Dación en Pago y al Modificadorio al Fideicomiso [REDACTED] para los fines allí previstos y en beneficio del Patrimonio B del referido fideicomiso, **la propiedad y titularidad de la totalidad de los Derechos de Crédito** que se describen en la relación que se adjunta al presente contrato como Anexo 1 (la Cesión de Derechos).*

De lo anterior se desprende que fue cedida la propiedad y titularidad de la totalidad de los derechos de crédito, lo que implica, que el **cedente dejó de llevar la administración de los mismos, así pues, el cesionario** [REDACTED] [REDACTED] **S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED] DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA,**

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO [REDACTED] únicamente
deberá notificar por escrito la cesión al deudor.

Así también, de la carta de veinticinco de agosto
de dos mil catorce, textualmente en lo que aquí atañe, dice:

*“Lic. [REDACTED], en mi carácter
de apoderado legal de la sociedad denominada
[REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE quien a su vez es apoderada de [REDACTED]
[REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED]
DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO, en el fideicomiso número [REDACTED]
señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo
de notificaciones y documentos el ubicado en [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], en
este acto con fundamento en el artículo 2036 del
Código Civil vigente para el Distrito Federal y sus
correlativos para las demás entidades federativas*

vengo a Notificar por Escrito Extrajudicialmente y ante la Presencia de 2 Testigos, la Constitución de Fideicomiso y la Cesión de Derechos que se detalla en el cuerpo del presente escrito y además a requerir del pago del saldo insoluto vencido y denunciar el Contrato de Apertura de Crédito con Interés y Garantía Hipotecaria, de fecha 15 de octubre de 2007, más accesorios legales, de conformidad con lo siguiente: ... - - - 5.- En virtud de lo anterior [REDACTED]

[REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA; INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED] DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO [REDACTED] es la actual titular de los derechos del crédito que le fue a usted otorgado por [REDACTED], S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. en fecha 15 de octubre de 2007, mediante la escritura pública número [REDACTED] ante la fe del Licenciado [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] titular de la Notaria Pública [REDACTED] del Distrito Federal. - - - 6.- Se informa que [REDACTED] S.A. DE C.V., ha sido designada como administrador de diversos créditos que son propiedad de Fideicomiso

entre los cuales se encuentran el crédito antes mencionado, por lo que cualquier asunto relacionado a los mismos deberá ser tramitado directo los créditos y convenidos modificatorios descritos en la presente notificación y que fueron cedidos por [REDACTED], S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. al Fideicomiso [REDACTED] ...”

En esa tesitura, contrariamente a lo sostenido por el impetrante del amparo, del documento transcrito con antelación, no se presta a confusión, y de que solo en él hubiese aparecido el nombre del hoy quejoso con el desconocimiento de su contenido y de que solo se mencionara [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOFOM, ENTIDAD NO REGULADA, de una dación de pago con SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Y SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, encontrándose ante dos entes jurídicos distintos, pues lo cierto es, que claramente se expresó:

a).- Que [REDACTED], es apoderado de la sociedad denominada ' [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE quien a su vez es apoderada de [REDACTED] [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED] DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO, en el fideicomiso número [REDACTED]

b).- Que [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA; INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED] DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO [REDACTED] es la actual titular de los derechos del crédito que le fue otorgado por [REDACTED] [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOFOM, ENTIDAD NO REGULADA, en fecha 15 de octubre de 2007, mediante la escritura pública número [REDACTED] ante la fe del Licenciado [REDACTED] titular de la Notaría Pública [REDACTED] del Distrito Federal.

c).- Que [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ha sido designada como administrador de diversos créditos que son propiedad de Fideicomiso [REDACTED] entre los cuales se encuentran el crédito antes mencionado, por lo que cualquier asunto relacionado a los mismos deberá ser tramitado directo los créditos y convenios modificatorios descritos en esa notificación y que fueron cedidos por [REDACTED] [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOFOM, ENTIDAD NO REGULADA al Fideicomiso [REDACTED]

De ahí que en sentido opuesto a lo afirmado por el peticionario del amparo, no existe incertidumbre en la carta de veinticinco de agosto de dos mil catorce.

En consecuencia, no es verdad que la sentencia reclamada resulte ilegal, porque como se vio, el quejoso entonces demandado, no se encontraba imposibilitado para efectuar el pago del crédito contratado, ante el desconocimiento de la cesión de derechos del crédito hipotecario originalmente pactado con [REDACTED]

[REDACTED], SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOFOM, ENTIDAD NO REGULADA.

Es aplicable la tesis 1a. I/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, visible en la página 257, que dice:

“CESIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS. EL ARTÍCULO 2,926 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

Conforme al citado artículo, en relación con los diversos 2,317, 2,320 y 2,917 del mismo ordenamiento, la cesión de créditos hipotecarios, por regla general, debe hacerse constar: a) en documento privado firmado por los contratantes ante dos testigos y ratificado ante notario, juez competente o el Registro Público de la Propiedad; b) en documento privado, sin los requisitos de testigos o de ratificación de firmas; y, c) en el protocolo abierto

especial a cargo de los notarios del Distrito Federal, o en escritura pública, siendo necesario notificar la cesión al deudor e inscribir el acto relativo en el aludido Registro. Ahora bien, el legislador estableció casos de excepción a dicha regla al disponer que quienes ceden un crédito hipotecario para garantizar obligaciones a la orden, pueden hacerlo mediante endoso del título, sin necesidad de otorgar escritura pública, de notificar al deudor y de registro, y que las instituciones del sistema bancario mexicano, actuando en nombre propio o como fiduciarias, las demás entidades financieras y los institutos de seguridad social, se encuentran eximidos de satisfacer tales requisitos, si llevan la administración de los créditos, y que en caso de que dejen de llevarla, únicamente deberán notificar por escrito la cesión al deudor. Esto es, el citado artículo 2,926 establece con meridiana claridad los requisitos o cargas que han de satisfacerse cuando se cede un crédito con garantía hipotecaria, así como en qué casos es indispensable notificar al deudor, permitiendo así a los gobernados conocerlos

cabalmente, sin dejar a criterio de alguna autoridad establecerlos caprichosa o arbitrariamente. Por tanto, dicho precepto no viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues además permite al deudor saber en qué casos su acreedor tiene la obligación de notificarle la cesión del crédito a su cargo, y ante quién debe cumplir las obligaciones respectivas, para asegurar su eventual defensa, pues por regla general la cesión del crédito a su cargo no le irroga perjuicio alguno, ya que conforme a los artículos 2,030 y 2,040 del Código Civil para el Distrito Federal, la cesión de derechos es válida y surte plenos efectos entre las partes aunque no se haya hecho la notificación al deudor, y la notificación a éste sólo tiene como efecto: a) evitarle un doble pago, es decir, si el lugar de pago cambia por virtud de un cambio de acreedor, el cesionario no podrá exigir doble pago si no notificó anticipadamente el cambio al deudor; y b) condicionar el ejercicio de las acciones legales del acreedor cesionario en contra del deudor.”

En concordancia con lo anterior, cabe señalar que la quem en la sentencia reclamada, además consideró literalmente lo siguiente:

*“Por tanto y en opinión de esta Alzada, las cartas que fueron enviadas por la actora a los enjuiciados, sí evidencian con toda nitidez su recepción por parte de los acreditados, porque tanto en la demanda inicial como en los documentos exhibidos como fundatorios de la acción (donde se localizan las citadas misivas), se observa que contienen el acuse de recibo por parte de los obligados, acuse que corre agregado a las carta enviadas tanto a [REDACTED] como a la señora [REDACTED] por el apoderado legal para pleitos y cobranzas de [REDACTED] S.A. DE C.V., licenciado [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], mediante las cuales comunicó a los aludidos deudores en presencia de dos testigos, **LA CONSTITUCION DEL FIDEICOMISO, LA CESIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO EL REQUERIMIENTO DE PAGO DEL SALDO INSOLUTO VENCIDO, MAS ACCESORIOS LEGALES.** - - - Por ello, es incuestionable que la actora sí **probó haber efectuado a los codeudores la notificación prevista por la ley; máxime si se toma en cuenta que en los acuses de recibo se aprecia la leyenda: **RECIBIO; NOMBRE; FIRMA;** donde se observa una firma ilegible de recibido el veinticinco de agosto de dos mil catorce,***

*cúmulo de particularidades que según se ha visto, no fueron combatidas ni objetadas por los codemandados aun cuando tuvieron oportuno conocimiento de que la actora aseveró que ellos las habían recibido ante dos testigos. - - - Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis de jurisprudencia del SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Epoca: Novena Epoca. Tomo XII, Diciembre del 2000. Página: 1137, que refiere lo siguiente: - - - ‘**ACCION, ESTUDIO OFICIOSO DE LOS ELEMENTOS DE LA, EN SEGUNDA INSTANCIA.**’ (Se transcriben datos de localización y texto). - - - No es óbice mencionar, que por las razones expuestas en líneas que anteceden, lo considerado por la sentencia apelada en relación de que las cartas de notificación fueron elaboradas de manera unilateral sin que se hicieran del conocimiento de los demandados, los que ninguna participación tuvieron en las mismas porque no se advertía sus firmas de recibido; en realidad carece de sustento, porque ello no fue alegado por los enjuiciados, antes bien según se ha visto, en todo momento conocieron los eventos que les atribuyó la accionante en su demanda, en relación de que a través de las cartas en comento les notificó de manera personal la cesión del crédito, por lo que en el mayor de los casos, corría a cargo de los demandados el deber procesal de desvirtuar su participación en esos actos, o bien, justificar que las firmas de recibido que aparecen en*

dichos documentos no habían sido estampadas de su puño y letra. - - - Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica, es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba. - - - En mérito de lo hasta aquí expuesto, y al evidenciarse que las consideraciones que sirvieron de base para desestimar la acción de primer grado fueron desafortunadas, este Tribunal en plenitud de jurisdicción entra al estudio integral de lo reclamado en el juicio natural, advirtiéndole que el derecho impetrado debe declararse procedente según se demuestra a continuación. - - - En efecto, como bien lo asentó la sentencia recurrida en este aspecto, en la especie, la parte actora demandó en la vía especial hipotecaria de los señores [REDACTED] [REDACTED] (sic) y [REDACTED] lo siguiente: a) la declaración judicial del vencimiento anticipado del plazo estipulado para cubrir el monto del adeudo, en virtud del incumplimiento de las obligaciones contraídas por los enjuiciados, de conformidad con lo previsto en la cláusula Décima Octava del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria contenido en el instrumento notarial [REDACTED] (ciento veintidós mil

donde quedó establecido que se podría dar por vencido anticipadamente, sin necesidad de declaración judicial, el plazo del Contrato de Apertura de Crédito, y en consecuencia, se les podría hacer exigible de inmediato el pago total del crédito, intereses causados y demás accesorios legales a los demandados, si éstos dejaban de cubrir puntualmente cualquier cantidad a su cargo derivada del referido convenio, de manera específica, si dejaban de pagar puntualmente cualquier cantidad a que estuvieran obligados conforme al citado contrato; b) como consecuencia de lo anterior el pago de la cantidad de \$

concepto de CAPITAL DE CRÉDITO VENCIDO (suerte principal), según consta en las cláusulas Primera y Segunda del contrato basal, y con la Certificación Contable expedida por el Contador Público certificado [REDACTED], con cédula profesional (1551379), con fundamento en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito; c) el pago de la cantidad de \$ [REDACTED] [REDACTED]

_____/100 M.N.) por concepto de INTERESES ORDINARIOS de conformidad con lo establecido en la cláusula Cuarta del Contrato de Apertura de Crédito,

calculados al siete de abril de dos mil catorce, así como el pago que por ese concepto se continúe generando hasta la total solución del presente juicio y que serían calculados en ejecución de sentencia; d) el pago de la cantidad de \$ [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] /100 M.N.) por concepto de **INTERESES MORATORIOS**, calculados hasta el siete de abril de dos mil catorce, con base en la cláusula Quinta del contrato básico, así como con el certificado contable, así como los intereses de este tipo que se continúen generando hasta la total solución del presente juicio y que serían calculados en ejecución de sentencia; y e) el pago de los gastos y costas que se origin por la tramitación del presente juicio. - - - Previos los trámites de ley, sólo el demandado [REDACTED] [REDACTED] (sic) en su escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil catorce dio oportuna contestación a las prestaciones reclamadas, negando su procedencia por las razones que adujo en su referido curso, oponiendo entre otras, la excepción de **INCOMPETENCIA**, la cual fue declarada infundada por este Tribunal mediante resolución del trece de enero de dos mil quince; asimismo, la de **IMPROCEDENCIA DE LA VIA**, y la de **FALTA DE PERSONALIDAD DE LA ACTORA**, mismas que se declararon improcedentes en la audiencia celebrada el veinte de enero de dos mil quince (foja 179 del expediente natural). - - - La esencia de la litis natural así como la necesidad de cubrir los

montos que se especificaron en la demanda inicial, se hizo consistir de manera substancial, en lo siguiente: **‘...los codemandados, han incumplido con su obligación de pago desde la erogación correspondiente al mes de octubre de 2007 y que debieron efectuar precisamente el día 28 de octubre de 2007 tal y como se acredita con la certificación contable expedida por el Contador Público certificado [REDACTED] [REDACTED], con cédula profesional 1551379 (uno, cinco, cinco, uno, tres, siete, nueve) y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito...’** (Hecho 11). - - - Al referirse a lo anterior, el demandado aseveró: **‘...resulta ser falso de manera total el contenido del mismo, ya que como se insiste de nueva cuenta y tal como lo expresa el suscrito en líneas que anteceden, el suscrito en ningún momento recibió de parte de la Institución de Crédito alguna cantidad de dinero con motivo del contrato de apertura de crédito multicitado, y como consecuencia inmediata de lo anterior, el nunca haber recibido el suscrito crédito alguno por medio o cantidad de dinero alguna por parte de la Institución de Crédito en comento, resulta totalmente imposible y fuera de toda lógica simple, que el suscrito haya incumplido con la obligación del pago de un crédito el cual nunca dispuso en ningún momento, arrojando desde este mismo momento la carga de la prueba de a la parte actora del presente procedimiento a fin de que demuestre mediante**

documental idónea la disposición del crédito por parte del suscrito.’ - - - No es óbice mencionar, que al contestar los hechos (1 y 2) de la demanda, el enjuiciado con toda nitidez **reconoció la suscripción del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria**, en los modos, términos y condiciones que se asentaron en dicho acto, así como que la escritura quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México. - - - De igual modo, la enjuiciante en el hecho 4 de la demanda narró lo siguiente: ‘Tal y como se acredita con el pagaré suscrito por los hoy demandados a favor de [REDACTED] [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, con fecha 15 (quince) de octubre del año 2007 (dos mil siete) lo (sic) hoy demandados **dispusieron de la totalidad del crédito**, es decir, de la cantidad de \$ [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] **PESOS, 00/100 M.N.)**.’ - - - Por su parte el enjuiciado, en lo que aquí importa, replicó lo siguiente: “4.- En cuanto al cuarto punto de hechos expuesto (sic) por el actor en su escrito inicial de demanda, me permito mencionar que el pagaré que fue firmado en su oportunidad por el suscrito, fue firmado a su vez como parte protocolaria del contrato de apertura de crédito, y sólo para el efecto de documentar tal y como lo

expresa el mismo contrato, el supuesto crédito concedido, pero en el presente caso en particular y tal como lo advertí oportunamente en líneas que anteceden, no hubo por parte del suscrito disposición alguna del citado crédito, por lo tanto desde este momento impugno y objeto el pagaré que acompaña el accionante a su escrito de demanda por la cantidad de

\$ [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

*[REDACTED] /100 M.N.), porque dicho título de crédito, es un documento causal que fue derivado en forma simultánea con la suscripción del citado contrato de apertura de crédito, y en el mismo no resulta ser prueba suficiente o idónea para que el actor pueda comprobar la disposición del supuesto crédito concedido por la Institución de Crédito, a su vez del propio contrato se deriva que en ese día no se iba a hacer disposición alguna de dinero, sino que la cantidad total del crédito, se iba a otorgar en parcialidades, las cuales a su vez tampoco fueron recibidas.’ - - De lo que se obtiene, que conjuntamente con el reconocimiento de la suscripción del contrato de apertura de crédito, el demandado también aceptó el hecho de haber firmado el aludido título de crédito, especificando, que fue **firmado como parte protocolaria del contrato de apertura de crédito, y sólo para el efecto de documentarlo, como lo expresa el mismo contrato, el supuesto crédito concedido, pero en el presente caso en particular, no***

hubo de su parte disposición alguna del citado crédito. - - - Así las cosas, y ante el reconocimiento categórico del enjuiciado en relación a la suscripción tanto del citado convenio básico como del pagaré, se estima procedente conferirle pleno valor probatorio al citado título de crédito como al contrato, el segundo de los mencionados, dada su propia y especial naturaleza de instrumento público en términos de lo dispuesto por los artículos 327 fracción I, 333 y 403 del Código de Procedimientos Civiles, habida cuenta que no fue impugnado por los enjuiciados ni objetado en forma alguna, debiendo estarse las partes al sentido literal de sus cláusulas dado que sus términos son claros sobre la intención de los contratantes, al no haberse suscitado controversia alguna respecto de los términos pactados, y por ende, acreditada cabalmente la relación contractual que une a los contrincantes consistente, en que los enjuiciados se obligaron a destinar el importe del crédito para su ‘liquidez’ (cláusula financiera A), constituyendo para tal propósito HIPOTECAS ESPECIALES, EXPRESAS Y EN PRIMER LUGAR EN FAVOR DE “LA ACREDITANTE”, sobre los inmuebles que se identificaron en la cláusula Octava. - - - Igualmente del citado convenio se aprecia, (cláusula financiera A), que la actora otorgó a los codemandados un crédito por la cantidad de \$ [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] 100 M.N.) como importe total del

préstamo numero ‘ [REDACTED]

[REDACTED] que “EL ACREDITADO” destinaría para liquidez. - - - En cuanto a la disposición de los citados recursos, la cláusula Segunda del acuerdo de voluntades en comento, puntualizó lo siguiente:

‘SEGUNDA.- DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO.- ‘EL

ACREDITADO’ podrá disponer del importe del crédito concedido con posterioridad a la firma del presente contrato con la conformidad de la ACREDITARTE (sic) en los siguientes términos: A) La cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, que se depositará en la cuenta número [REDACTED], con clabe interbancaria número

‘0 [REDACTED], del banco [REDACTED] SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED] y a favor del señor [REDACTED] B) La

cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], que

se depositará en la cuenta número [REDACTED], con clabe interbancaria número ‘0 [REDACTED] del banco [REDACTED] [REDACTED] **SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO** [REDACTED] y a favor del señor [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] de la que es titular ‘EL ACREDITADO’ y de igual forma podrá recibir directamente de ‘LA ACREDITANTE’, en caso de imprevistos, el importe de la disposición del crédito, firmando pagarés y todo tipo de documentos que

acusen el recibo de las mismas. Para documentar las disposiciones del presente crédito, ‘EL ACREDITADO’, suscribirá pagarés u otros documentos, a favor de ‘LA ACREDITANTE’, a satisfacción de la misma por el importe total del crédito, los cuales deberán reunir las características establecidas en el artículo ciento setenta de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y su entrega no se considera como pago, ya que la suscripción de estos solamente documentan la disposición realizada al amparo del presente contrato.’ - - - Asimismo, los acreditados se obligaron a amortizar el crédito concedido en un plazo de DIECIOCHO MESES contados a partir de la fecha de firma de dicho instrumento (cláusula Tercera). - - - También se advierte, que el notario público (foja 27 del contrato de mérito), les leyó y explicó el contenido de la escritura a los comparecientes, quienes le manifestaron su conformidad con ella y la firmaron el quince de octubre de dos mil siete. - - - De igual modo se observa que la enjuiciante, exhibió el pagaré único suscrito el quince de octubre de dos mil siete por el señor [REDACTED] (suscriptor), y por la aval [REDACTED] por la cantidad de \$ [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] /100 M.N.), a la orden de [REDACTED]
[REDACTED] S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. - - -
También, la demandante presentó el certificado

contable expedido por el contador público [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] designado por [REDACTED]

[REDACTED] **SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED]
DIVISIÓN FIDUCIARIA, ÚNICAMENTE EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO**

[REDACTED] donde se especificó que el acreditado era el
señor [REDACTED] [REDACTED] **(sic)** y la garante
hipotecaria [REDACTED] a quienes se les

otorgó un CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
SIMPLE CON GARANTÍA HIPOTECARIA del quince de
octubre de dos mil siete, por la cantidad de

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] **N.)** por concepto de capital vencido,
más intereses ordinarios de [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] **.N.)**

generados del dieciséis de octubre de dos mil siete al
quince de abril de dos mil nueve, así como intereses
moratorios de \$ [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] generados del dieciséis
de abril de dos mil nueve al siete de abril de dos mil
catorce, arrojando un total adeudado de \$ [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] **).** - - - No es óbice mencionar, que el estado de
cuenta certificado tiene pleno valor probatorio por haber

sido expedido por un contador facultado por la institución bancaria identificada en líneas que anteceden, ya que así lo tiene previsto el artículo 68 de la Ley General de Instituciones de Crédito. - - - Al respecto, también se actualiza la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Marzo de 1997. Materia: Civil. Página: 277, intitulada: **‘CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR EL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).’** - - - Por lo que en todo caso, le correspondía al demandado demostrar la inexistencia tanto del adeudo como de los intereses ordinarios y moratorios, por haberlos pagado parcial o totalmente, y no a la acreditante, porque el valor probatorio de la certificación se presume, según dicho precepto, salvo prueba en contrario. - - - Luego, atendiendo al principio de congruencia que debe regir en las resoluciones judiciales es patente que en la especie se encuentra debidamente justificado que los deudores mantienen el adeudo que se señaló en el escrito inicial de demanda derivado del crédito que les fue otorgado. - - - Tampoco puede perderse de vista, que la suerte principal identificada como prestación “B” del escrito inicial de demanda no es la prestación principal

impetrada a la que deberían seguir en su suerte el resto de las prestaciones exigidas, sino el vencimiento anticipado del contrato base de la acción (prestación A) debido al incumplimiento de las obligaciones contraídas por los acreditados, de tal forma es indispensable que se aborde el estudio de la acción real hipotecaria consistente en el vencimiento anticipado del contrato base de la acción, ante el incumplimiento de pago por parte de los obligados desde el mes de octubre de dos mil siete, así como con el contenido de la escrito de contestación del demandado y las excepciones que opuso de su parte, valorando las pruebas ofrecidas por las partes en su conjunto a la luz de las reglas de la lógica y de la experiencia, decidiendo desde luego todos los puntos litigiosos que fueron expuestos. - - - También trasciende la particularidad de que la codemandada [REDACTED] se constituyó en rebeldía, misma que fue declarada por auto de doce de diciembre de dos mil catorce (foja 159) teniéndose por presumiblemente confesados los hechos de la demanda en su perjuicio. - - - Bajo esa tesitura y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 281 y 282 del Código Adjetivo Civil les corresponde a las partes el deber procesal de acreditar los hechos constitutivos de sus respectivas pretensiones, por tanto, si la actora ya había aseverado que el demandado incumplió con su obligación de pago desde el mes de octubre de dos mil siete, legalmente no se encontraba obligada a justificarlo sino al enjuiciado,

quien como ya se ha visto, esencialmente se limitó a señalar que en ningún momento se le hizo entrega de las disposiciones convenidas en el contrato basal. - - -

La postura asumida por el obligado, en opinión de esta Alzada es infundada, porque parte de una interpretación errónea tanto del contenido integral del contrato basal como del título de crédito, los cuales como ya se ha visto, con toda nitidez reconoció haber firmado en su oportunidad. - - - En efecto, en el citado convenio en el capítulo denominado 'Cláusulas Financieras', estipulación Segunda, se asentó lo siguiente: '**SEGUNDA.- DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO.-** 'EL ACREDITADO' podrá disponer del importe del crédito concedido con posterioridad a la firma del presente contrato con la conformidad de la ACREDITANTE en los siguientes términos: A) La cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] **MONEDA NACIONAL**, que se depositará en la cuenta número [REDACTED] con clave interbancaria número [REDACTED], del banco [REDACTED]

[REDACTED] **SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO** [REDACTED] y a favor del señor [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] B) La cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] **PESOS MONEDA NACIONAL**, que se depositará en la cuenta número [REDACTED] con clave interbancaria número [REDACTED] del banco [REDACTED]

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED] y a favor del señor [REDACTED] de la que es titular 'EL ACREDITADO' y de igual forma podrá recibir directamente de 'LA ACREDITANTE', en caso de imprevistos, el importe de la disposición del crédito, firmando pagarés y todo tipo de documentos que acusen el recibo de las mismas. **Para documentar las disposiciones del presente crédito, 'EL ACREDITADO', suscribirá pagares u otros documentos, a favor de 'LA ACREDITANTE', a satisfacción de la misma por el importe total del crédito, los cuales deberán reunir las características establecidas en el artículo ciento setenta de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito (sic) y su entrega no se considera como pago, ya que la suscripción de estos solamente documentan la disposición realizada al amparo del presente contrato.'** - - - Atendiendo al sentido literal del clausulado transcrito en líneas que anteceden, de manera conjunta con el contenido del pagaré y de la certificación contable, en opinión de este Tribunal es claro que sí le fue entregado el monto total del crédito al demandado, pues desde que se dijo que, para documentar las disposiciones del crédito, 'EL ACREDITADO', suscribiría pagarés u otros documentos, a favor de 'LA ACREDITANTE', a satisfacción de la misma por el importe total del crédito; siendo que en la especie según lo reconoció el obligado, firmó el contrato y el referido título de crédito, entonces es evidente que se observó cabalmente la

*mecánica prevista por las partes para justificar la entrega de los recursos solicitados al ‘acreditado’, máxime que ello fue con posterioridad corroborado por la certificación contable; esto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1832, 1851, 1856, 1858 y 1859 del Código Sustantivo Civil. - - - En ese contexto, el empleo de la expresión ‘podrá disponer del importe del crédito concedido con posterioridad a la firma del presente contrato’; contrario a lo que se indicó, no tiene el significado que le atribuyó el demandado, en el sentido de que sólo fue una expectativa que no llegó a materializarse, puesto que firmó el pagaré con la finalidad de documentar la entrega de los recursos en cuestión, amén de que si también se obligó a liquidar el adeudo en dieciocho meses contados a partir de la firma de la escritura, es porque sí recibió la totalidad del crédito dispuesto. - - - Ahora bien, para acreditar su postura el codemandado ofreció como pruebas de su parte, **la confesional judicial** espontánea de su adversaria, relativa a todas las manifestaciones que hizo en todas y cada una de sus promociones y comparecencias que consten en el expediente y en lo que favorezcan al demandado; **la documental pública**, consistente en el contrato de apertura de crédito base de la acción de la actora; **la confesional de la actora**; **la instrumental de actuaciones**; y, **la presuncional legal y humana**. - - - Una vez valorado en su conjunto el referido material probatorio acorde a las reglas de la lógica y de la experiencia previstas en los artículos 402*

y 403 del Código Adjetivo Civil, esta Alzada arriba a la conclusión que ningún beneficio le reportan al oferente, ni constituyen las pruebas idóneas para justificar la premisa substancial de que el enjuiciado en ningún momento dispuso del supuesto crédito, o bien, que nunca se le hizo entrega de alguna cantidad de dinero; pues como ya se ha demostrado en líneas que anteceden en la especie se demostró una cosa distinta, en ese tenor, en realidad todo lo manifestado por la enjuiciante prueba en contra del obligado, ya que aquélla parte fue por demás categórica al exigirle el cumplimiento puntual del crédito que en su momento le otorgó. - - - Comparte idénticas consideraciones jurídicas, el contenido integral del convenio básico, cuyo análisis ya se abordó en el presente capítulo, y por esa razón, no le asiste razón al demandado al aseverar que de dicho contrato no se desprende alguna evidencia sobre la disposición del crédito. - - - En lo atinente al resultado que reportó la prueba confesional de la actora, desahogada en la audiencia celebrada el tres de febrero de dos mil quince, tampoco le reporta cierto beneficio al oferente, porque aun cuando se le declaró fictamente confesa de las posiciones que previamente fueron calificadas de legales, de las mismas sólo se corrobora lo atinente a la celebración del contrato de apertura de crédito ante fedatario público: y, quién ostenta la titularidad de los derechos crediticios; más no así, algún otro reconocimiento que pudiera beneficiar al enjuiciado. - - - Por lo que

*corresponde a la instrumental de actuaciones; en opinión de este Tribunal, en realidad le reporta un resultado adverso al oferente, dado que en ese material se encuentran incluidos el contrato de apertura de crédito; el pagaré; el certificado contable; así como la contestación a la demanda; donde con toda nitidez se encuentra debidamente identificado tanto el crédito conferido; la disposición del mismo por parte del acreditado; los intereses ordinarios y moratorios; pero sobre todo, el reconocimiento expreso y categórico del obligado en relación de que suscribió y participó en los instrumentos basales. - - - Finalmente, la **presuncional legal y humana**; no le reporta algún beneficio al interesado, pues como ya se ha demostrado en líneas que anteceden, la actora a través de los elementos que desahogó sí logró acreditar que el demandado dispuso del crédito y se obligó a liquidarlo en los términos asentados en el contrato basal, lo cual, no es susceptible de desvirtuarse a través de simples conjeturas. - - - Apoya lo anterior, el criterio de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quinta Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: XXXIV. Página: 1205, que refiere lo siguiente: - - - ‘**PRUEBAS PRESUNTIVAS.**’ (Se transcriben datos de localización y texto). - - - Por tanto, resulta procedente entrar al estudio del capítulo de excepciones que hizo valer el demandado en su contestación a la demanda, en particular la de **falta de acción y carencia de derecho** del actor, que según se*

*hizo consistir, en que no probó que el obligado hubiera efectuado las disposiciones del crédito, amén de que el simple (sic) contrato de apertura básico y su respectivo estado de cuenta no resultan suficientes para acreditar la utilización del crédito, amén de que la suscripción del pagaré tampoco constituye una prueba fehaciente de la disposición de los recursos controvertidos; es infundada, pues como también en este aspecto ya se ha demostrado a lo largo del presente considerando, en la especie, la enjuiciante con los elementos aludidos sí logró justificar los extremos de su acción. - - - Al respecto, se actualiza la **jurisprudencia** del QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Octava Época. Fuente: Apéndice de 1995 Tomo IV, Parte TCC. Materia: Civil. Página: 455, que refiere lo siguiente: - - - **‘TÍTULO DE CRÉDITO, NO DESNATURALIZA SU CARÁCTER DE, LA EXCEPCIÓN PERSONAL RELATIVA A QUE FUE SUSCRITO EL DOCUMENTO EN GARANTÍA DE UN ADEUDO, SI EL DEUDOR NO PROBÓ QUE CUMPLIÓ CON SU OBLIGACIÓN.’** (Se transcriben datos de localización y texto). - - - Por tanto, si desde el particular punto de vista del demandado el pagaré sólo sirvió para documentar el **‘supuesto adeudo contraído en el contrato principal’**; en opinión de este Tribunal es claro que la defensa que se analiza es infundada, porque se parte de una ponderación aislada de dicho título de crédito sin contrastarlo con el contenido del contrato basal y con el certificado*

contable; los cuales, como ya se ha demostrado, sí ponen de relieve la disposición del crédito por parte del obligado. - - - La excepción que se denomina de nulidad por falsedad, es infundada, ya que el enjuiciado insiste en señalar que la actora no justificó que le entregó el monto del crédito porque en la cláusula segunda del contrato basal se empleó la expresión “podrá disponer” con posterioridad a la firma del convenio con la conformidad de la acreditante; empero como dichas particularidades ya se encuentran debidamente analizadas en este fallo, no es dable formular un nuevo pronunciamiento. - - - La defensa de nulidad del contrato de apertura de crédito, basada en que dicho acuerdo de voluntades contiene cláusulas que contrarias a las normas establecidas por preceptos de interés público; es infundada, ya que el enjuiciado de ningún modo identifica cuál es el marco normativo que supuestamente es de interés público y que es adverso a la voluntad de los interesados contenida en el contrato básico. De igual modo, lo alegado en relación de que no se fijó la porción de la cual respondería cada finca hipotecada (sic); es infundado ya que en el contrato básico en su cláusula octava, al referirse a los bienes otorgados en garantía, con toda nitidez, se acordó que la hipoteca comprendería todo cuanto corresponda de derecho a los inmuebles hipotecados, sin reserva ni limitación alguna, de acuerdo con los artículos 2896 y 2897 del Código Civil, por lo que acorde a la voluntad expresa de las partes,

no era indispensable que se fijara una porción sobre cada finca, ni tampoco el valor real de cada una de ellas, toda vez que nuestra legislación no le exige de esa manera. - - - Sobre la cantidad que garantizarían los bienes hipotecados, tampoco existe cierta imprecisión pues con toda nitidez en el contrato del crédito se especificó cuál era la porción sobre la que responderían (v. cláusula Octava), por lo que es claro que sí existe la identificación precisa del valor que garantizan los bienes otorgados en garantía, esto con fundamento en los artículos 2893 y 2896 del Código Civil. - - - En mérito de lo hasta aquí expuesto, es evidente que lo concertado por los contendientes no es nulo de pleno derecho ni transgrede disposiciones de orden público, como erróneamente se pretendió establecer, máxime que ello se hace valer después de haber aprovechado en su totalidad de los efectos del convenio tachado de nulo, y por esa razón, el criterio federal que transcribe el demandado no resulta conculcado en su perjuicio. - - - La defensa de la improcedencia de la vía sumaria civil; es infundada, pues según se ha demostrado en líneas que anteceden, así lo declaró el juez natural. - - - La excepción de incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte del demandante; es infundada, ya que el enjuiciado insiste en señalar que en ningún momento recibió el monto del crédito, particularidad que ya se encuentra debidamente dilucidada en la presente sentencia, motivo por el cual, no es dable

*efectuar un nuevo pronunciamiento. - - - Comparte idénticas consideraciones jurídicas, la defensa de falta de acción y carencia de derecho para solicitar el pago de intereses moratorios, puesto que el demandado vuelve a señalar que en ningún momento recibió el monto del crédito, amén de que no hubo incumplimiento de su parte; pero todo ello sin acreditarlo. - - - También comparte los mismos razonamientos, la excepción de de (sic) falta de acción y carencia de derecho; pues el demandado insiste en esbozar que la actora no puso a su disposición el crédito ni manifestó si fue dispuesto por el obligado, amén de que tampoco acreditó que le entregó los cheques correspondientes; particularidad que de igual modo, ya fue analizada por este Tribunal por lo que no es dable abordar nuevamente su análisis, y por ese motivo, el criterio federal que transcribe tampoco le beneficia.- - - La defensa de falta de acción y carencia de derecho basada en la particularidad de que la actora ([REDACTED] S.A.) no es una institución de crédito (sic); es infundada, pues es un hecho por demás notorio para este Tribunal que la enjuiciante sí forma parte del sistema bancario mexicano, y si a ello se adiciona la circunstancia de que el contador público en su certificado contable con toda nitidez asentó que fue: ‘...designado por [REDACTED] [REDACTED] **SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED] DIVISIÓN FIDUCIARIA...**’, para elaborar las estimaciones que*

rindió; entonces es claro que sus argumentos son infundados, sin que sea óbice mencionar que las tasas de interés que se tomaron en cuenta, fueron las que expresamente se autorizaron en el contrato de apertura de crédito (TIIE) según se advierte del contenido de la estipulación Cuarta, por lo que si desde el particular punto de vista del enjuiciado, se aplicaron “diversos instrumentos” (sin identificar cuáles), y que era indispensable evidenciar de dónde y cómo se obtuvieron, también es infundado, pues el contador público aludido con toda nitidez expresó la manera en que obtuvo el saldo a su cargo, así como la forma en que aplicó los intereses concertados. - - - Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Octubre de 2000. Materia: Civil. Página: 1097, que refiere lo siguiente: - - -

‘CERTIFICADO DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO. NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE LAS PUBLICACIONES OFICIALES EN DONDE APAREZCAN LAS TASAS QUE SE APLICARON EN LA CUANTIFICACIÓN DE LOS INTERESES.’ (Se transcriben datos de localización y texto). - - - No es óbice mencionar, que por los motivos identificados en líneas que anteceden, la tesis federal aislada que transcribe el demandado en apoyo de su postura, no resulta conculcada en su perjuicio, máxime que no constituye un criterio

obligatorio para este Tribunal. - - - Comparte idénticas estimaciones jurídicas, la defensa de falta de acción y carencia de derecho de la actora, en relación de que la certificación contable no justifica las disposiciones; que no explica qué operaciones aritméticas realizó el contador para llegar a su conclusión de que se adeudan intereses ordinarios y moratorios; que no estableció un procedimiento contable pertinente para establecer el quantum de los intereses ordinarios; que la certificación no refiere qué tipo de interés es el que precisa; qué organismo determinó la tasa de interés; que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito no establece ni faculta al contador para certificar cuáles son el monto de la tasa de interés que mensualmente prevalece en el mercado de dinero; y que el actor tenía la obligación de acreditar con documentos idóneos la veracidad de las tasas de interés; pues como ya se ha evidenciado en líneas que anteceden, en realidad la certificación contable exhibida como instrumento básico no requiere la observancia de las particularidades que invoca el enjuiciado, antes bien, de su simple lectura se advierte que con toda nitidez se identificó el monto del capital dispuesto, las tasas de interés, así como los mecanismos que se emplearon para obtener el saldo a cargo del obligado, por lo que debe reiterarse que si el demandado estimaba que los datos contenidos en el estado de cuenta, en relación con las tasas que se aplicaron para la cuantificación de los intereses reclamados, eran incorrectos, a él le corresponde

aportar las pruebas conducentes a fin de destruir la presunción legal establecida en el precepto en comento. - - - La excepción de falta de acción y carencia de derecho de la actora para demandar el pago de accesorios atento al principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, si ni justificó las disposiciones de las cantidades que se le reclamaron, y que era a su cargo al menos justificar el cobro de intereses; es infundada, pues también constituye un tópico al que se da respuesta integral a través de los razonamientos jurídicos expuestos a lo largo de este capítulo, sin que sea óbice mencionar, que en la demanda (hecho 11) sí se especificó el momento en que los demandados incurrieron en mora y el por qué se exigió el vencimiento anticipado de lo concertado, motivo por los cuales los criterios federales que se transcriben no resultan transgredidos en perjuicio del enjuiciado. - - - La defensa de falta de acción y carencia de derecho, es infundada, ya que el demandado insiste en señalar que la disposición del crédito no quedó acreditada y que al no quedar justificada dicha premisa no hubo incumplimiento de su parte; sin embargo, como ya se ha explicado, no es dable abordar el análisis de dicha particularidad pues a través de los argumentos expuestos en líneas que anteceden, se da respuesta integral a dicha excepción. - - - Sobre la cuestión de competencia, tampoco se hace un nuevo pronunciamiento pues la misma, según se ha demostrado, en su oportunidad fue declarada

infundada por este Tribunal. - - - Comparte idénticas consideraciones la excepción de falta de legitimación activa y pasiva, pues a través de los instrumentos que la actora ofreció como pruebas de su parte con toda nitidez se corrobora el interés jurídico que tiene sobre el crédito controvertido, motivo por el cual de ningún modo se le puede estimar como una persona extraña, amén de que el hecho de que el contrato básico en un inicio lo hubiera celebrado con una empresa distinta, ello no excluye la participación de la enjuiciante en el proceso de origen, máxime si se toma en cuenta, que en su oportunidad le fue debidamente notificada la cesión del crédito al obligado, por tanto, si desde el particular punto de vista del demandado su crédito no fue objeto de cesión, entonces es claro que la defensa en comento, es infundada, ya que en la especie el enjuiciado con toda nitidez reconoció tanto la suscripción del contrato de apertura de crédito como del título de crédito a través del cual se documentó la disposición de esos recursos.”

De la precedente transcripción y puesta en formal confrontación con lo aducido por el quejoso, se advierte que **no controvierte de manera alguna los razonamientos medulares** antes transcritos, relativos al análisis del vencimiento anticipado del contrato de crédito, excepciones

y defensas, personalidad, competencia, legitimación, intereses ordinarios y moratorios, consistentes en:

a).- Que con las cartas que fueron enviadas por la actora a los enjuiciados, evidenciaban su recepción por parte de los acreditados, porque tanto en la demanda inicial como en los documentos exhibidos como fundatorios de la acción, se observaba que contenían el acuse de recibo por parte de los obligados, acuse que corría agregado a las cartas enviadas tanto a [REDACTED] como a [REDACTED] por el apoderado para pleitos y cobranzas de [REDACTED] **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, mediante las cuales comunicó a los aludidos deudores en presencia de dos testigos, la constitución del fideicomiso, la cesión de derechos, así como el requerimiento de pago del saldo insoluto vencido, más accesorios legales.

b) Que la actora sí probó haber efectuado a los codeudores la notificación prevista por la ley; máxime si se tomaba en cuenta que en los acuses de recibo se apreciaba la leyenda: “*RECIBIO; NOMBRE; FIRMA*”; donde

se observaba una firma ilegible de recibido el veinticinco de agosto de dos mil catorce, además, corría a cargo de los demandados el deber procesal de desvirtuar su participación en esos actos, o bien, justificar que las firmas de recibido que aparecían en dichos documentos no habían sido estampadas de su puño y letra.

c).- Que solamente el demandado [REDACTED] en su escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, dio oportuna contestación a las prestaciones reclamadas, negando su procedencia por las razones que adujo en su referido recurso, oponiendo entre otras, la excepción de incompetencia, la cual fue declarada infundada por la ad quem mediante resolución del trece de enero de dos mil quince; asimismo, la de improcedencia de la vía, y la de falta de personalidad de la actora, mismas que se declararon improcedentes en la audiencia celebrada el veinte de enero de dos mil quince.

d).- Que la esencia de la litis natural así como la necesidad de cubrir los montos que se especificaron en la demanda inicial, se hizo consistir de manera substancial, en

que los codemandados, habían incumplido con su obligación de pago desde la erogación correspondiente al mes de octubre de dos mil siete, y que debieron efectuar precisamente el día veintiocho de octubre de dos mil siete, tal y como se acreditaba con la certificación contable expedida por el contador público certificado [REDACTED] [REDACTED] y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito.

e).- Que al referirse a lo anterior, el demandado aseveró que resultaba ser falso, porque en ningún momento recibió de parte de la Institución de Crédito, alguna cantidad de dinero con motivo del contrato de apertura de crédito o cantidad de dinero por dicho ente moral, que no dispuso del crédito; luego no era óbice que al contestar los hechos uno y dos de la demanda, el enjuiciado reconoció la suscripción del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, en los modos, términos y condiciones que se asentaron en dicho acto, así como que la escritura quedó inscrita en el Registro Público

de la Propiedad y de Comercio de Tlalnepantla, Estado de México.

f).- Que la enjuiciante en el hecho cuatro de la demanda narró que con el pagaré suscrito por la parte demandada, a favor de [REDACTED] [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, se acreditaba que los demandados dispusieron de la totalidad del crédito, por la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] pesos.

g).- Que de lo anterior se obtenía, que conjuntamente con el reconocimiento de la suscripción del contrato de apertura de crédito, el demandado también aceptó el hecho de haber firmado el aludido título de crédito al dar contestación a la demanda inocada en su contra, especificando, que fue firmado como parte protocolaria del contrato de apertura de crédito, y sólo para el efecto de documentarlo, como lo expresaba el mismo contrato, el supuesto crédito concedido, pero en el presente caso en

particular, no hubo de su parte disposición alguna del citado crédito; así las cosas, y ante el reconocimiento categórico del enjuiciado en relación a la suscripción tanto del citado convenio básico como del pagaré, se estimaba procedente conferirle pleno valor probatorio al citado título de crédito como al contrato, el segundo de los mencionados, dada su propia y especial naturaleza de instrumento público en términos de lo dispuesto por los artículos 327 fracción I, 333 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, habida cuenta que no fue impugnado por los enjuiciados ni objetado en forma alguna, debiendo estarse las partes al sentido literal de sus cláusulas dado que sus términos eran claros sobre la intención de los contratantes, al no haberse suscitado controversia alguna respecto de los términos pactados, y por ende, acreditada cabalmente la relación contractual que unía a los contrincantes consistente, en que los enjuiciados se obligaron a destinar el importe del crédito para su liquidez, cláusula financiera A), constituyendo para tal propósito hipotecas especiales, expresas y en primer lugar en favor de la acreditante, sobre los inmuebles que se identificaron en la cláusula octava.

h).- Que de la cláusula financiera A), se apreciaba que la actora otorgó a los codemandados un crédito por la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] pesos, como importe total del préstamo número "[REDACTED] [REDACTED], que el acreditado destinaría para liquidez; que en cuanto a la disposición de los citados recursos, la cláusula segunda del acuerdo de voluntades puntualizó que el acreditado podría disponer del importe del crédito concedido con posterioridad a la firma del contrato, con la conformidad de la acreditante en los siguientes términos: A) La cantidad de trescientos setenta y cinco mil pesos, moneda nacional, que se depositaría en la cuenta número '[REDACTED]', con clabe interbancaria número '0 [REDACTED]', del banco [REDACTED] [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED] y a favor del señor [REDACTED] B) La cantidad de [REDACTED] pesos, moneda nacional, que se depositaría en la cuenta número [REDACTED]', con clabe interbancaria número '[REDACTED]', del banco [REDACTED] [REDACTED]

SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED] y a favor del señor [REDACTED] de la que era titular el acreditado y de igual forma podría recibir directamente de la acreditante, en caso de imprevistos, el importe de la disposición del crédito, firmando pagarés y todo tipo de documentos que avalaban el recibo de las mismas.

i).- Que para documentar las disposiciones del crédito, el acreditado, suscribirá pagarés u otros documentos, a favor de la acreditante, a satisfacción de la misma por el importe total del crédito, los cuales deberían reunir las características establecidas en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y su entrega no se consideraría como pago, ya que la suscripción de esos documentos, solamente documentaban la disposición realizada al amparo del contrato; que los acreditados se obligaron a amortizar el crédito concedido en un plazo de dieciocho meses contados a partir de la fecha de firma de dicho instrumento, establecido en la cláusula tercera.

j).- Que el notario público, les leyó y explicó el contenido de la escritura a los comparecientes, quienes le manifestaron su conformidad con ella y la firmaron el quince de octubre de dos mil siete; que de igual modo se observaba que la enjuiciante, exhibió el pagaré único suscrito el quince de octubre de dos mil siete por el señor [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (suscriptor), y por la aval [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] por la cantidad de **cuatro millones setenta y nueve mil, cuatrocientos noventa y cinco pesos**, a la orden de [REDACTED] **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOFOM, ENTIDAD NO REGULADA.**

k).- Que la demandante presentó el certificado contable expedido por el contador público [REDACTED] [REDACTED] designado por [REDACTED] **SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED] DIVISIÓN FIDUCIARIA, ÚNICAMENTE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO [REDACTED] donde se especificó que el acreditado era el señor [REDACTED] [REDACTED] y la garante hipotecaria [REDACTED]**

a quienes se les otorgó un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria del quince de octubre de dos mil siete, por la cantidad referida en párrafos anteriores, por concepto de capital vencido, más intereses ordinarios por un monto de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] centavos, generados del dieciséis de octubre de dos mil siete al quince de abril de dos mil nueve, así como intereses moratorios por [REDACTED]

[REDACTED] centavos, generados del dieciséis de abril de dos mil nueve al siete de abril de dos mil catorce, arrojando un total adeudado de [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

I).- Que el estado de cuenta certificado tenía pleno valor probatorio por haber sido expedido por un contador facultado por la institución bancaria, ya que así lo tiene previsto el artículo 68 de la Ley General de Instituciones de Crédito; en sustento de lo anterior invocó el criterio bajo el rubro: *“CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA*

BANCARIO CERTIFICADO POR EL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).”

m).- Que le correspondía al demandado demostrar la inexistencia tanto del adeudo como de los intereses ordinarios y moratorios, por haberlos pagado parcial o totalmente, y no a la acreditante, porque el valor probatorio de la certificación se presumía, según dicho precepto, salvo prueba en contrario; que atendiendo al principio de congruencia que debía regir en las resoluciones judiciales era patente que en el caso se encontraba debidamente justificado, que los deudores mantenían el adeudo que se señaló en el escrito inicial de demanda derivado del crédito que les fue otorgado.

n).- Que la prestación principal lo era el vencimiento anticipado del contrato base de la acción, debido al incumplimiento de las obligaciones contraídas por los acreditados, de tal forma, era indispensable que se abordara el estudio de la acción real hipotecaria consistente

en el vencimiento anticipado del contrato base de la acción, ante el incumplimiento de pago por parte de los obligados desde el mes de octubre de dos mil siete, así como con el contenido del escrito de contestación del demandado y las excepciones que opuso de su parte, valorando las pruebas ofrecidas por las partes en su conjunto a la luz de las reglas de la lógica y de la experiencia, decidiendo desde luego todos los puntos litigiosos que fueron expuestos.

ñ).- Que era trascendente la particularidad de que la codemandada [REDACTED] se constituyó en rebeldía, misma que fue declarada por auto de doce de diciembre de dos mil catorce, teniéndose por presumiblemente confesados los hechos de la demanda en su perjuicio; que bajo esa tesitura y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 281 y 282 del Código Adjetivo Civil les correspondía a las partes el deber procesal de acreditar los hechos constitutivos de sus respectivas pretensiones, por tanto, si la actora ya había aseverado que el demandado incumplió con su obligación de pago desde el mes de octubre de dos mil siete, legalmente no se encontraba obligada a justificarlo sino al enjuiciado, quien

esencialmente se limitó a señalar que en ningún momento se le hizo entrega de las disposiciones convenidas en el contrato basal; así la postura asumida por el obligado, en opinión de la ad quem era infundada, porque partía de una interpretación errónea tanto del contenido integral del contrato basal como del título de crédito, los cuales reconoció haber firmado en su oportunidad.

o).- Que atendiendo al sentido literal del clausulado del contrato base de la acción, sí le fue entregado el monto total del crédito al demandado, pues para documentar las disposiciones del crédito, el acreditado, suscribiría pagarés u otros documentos, a favor de la acreditante, a satisfacción de la misma por el importe total del crédito; siendo que en la especie según lo reconoció el obligado, firmó el contrato y el referido título de crédito, entonces era evidente que se observó cabalmente la mecánica prevista por las partes para justificar la entrega de los recursos solicitados al acreditado, máxime que ello fue con posterioridad, corroborado por la certificación contable, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1832, 1851, 1856, 1858 y 1859 del Código Sustantivo Civil.

p).- Que con las pruebas que aportó la parte enjuiciada al juicio, referentes al contrato de apertura de crédito base de la acción de la actora; la confesional de la actora; la instrumental de actuaciones; y, la presuncional legal y humana, ningún beneficio le reportaban al oferente, ni constituían las pruebas idóneas para justificar la premisa substancial de que el enjuiciado en ningún momento dispuso del supuesto crédito, o bien, que nunca se le hizo entrega de alguna cantidad de dinero; que en lo concierne a la prueba confesional de la actora, desahogada en la audiencia celebrada el tres de febrero de dos mil quince, tampoco le reportaba beneficio a la parte enjuiciada, porque aun cuando se le declaró fíctamente confesa de las posiciones que previamente fueron calificadas de legales, de las mismas sólo se corroboraba lo atinente a la celebración del contrato de apertura de crédito ante fedatario público: y, quién ostentaba la titularidad de los derechos crediticios; más no así, algún otro reconocimiento que pudiera beneficiar a la enjuiciada; que la instrumental de actuaciones; le reportaba un resultado adverso al oferente, dado que en ese material se encontraban incluidos el contrato de apertura de crédito; el

pagaré; el certificado contable; así como la contestación a la demanda; donde con toda nitidez se encontraba debidamente identificado tanto el crédito conferido; la disposición del mismo por parte del acreditado; los intereses ordinarios y moratorios; pero sobre todo, el reconocimiento expreso y categórico del obligado en relación de que suscribió y participó en los instrumentos basales; de la misma forma no le beneficiaba a sus intereses, la presuncional legal y humana; en sustento de lo anterior invocó la tesis bajo el rubro: *“TITULO DE CRÉDITO, NO DESNATURALIZA SU CARÁCTER DE, LA EXCEPCIÓN PERSONAL RELATIVA A QUE FUE SUSCRITO EL DOCUMENTO EN GARANTÍA DE UN ADEUDO, SI EL DEUDOR NO PROBÓ QUE CUMPLIÓ CON SU OBLIGACIÓN.”*

q).- Que si desde el particular punto de vista de la parte demandada el pagaré sólo sirvió para documentar el supuesto adeudo contraído en el contrato principal; era claro que la excepción de falta de acción no era procedente, porque dicha defensa, partía de una ponderación aislada de dicho título de crédito sin

contrastarlo con el contenido del contrato basal y con el certificado contable; los cuales, sí ponían de relieve la disposición del crédito por parte del obligado; que la excepción que se denominaba de nulidad por falsedad, era infundada, ya que el enjuiciado insistía en señalar que la actora no justificó que le entregó el monto del crédito porque en la cláusula segunda del contrato basal se empleó la expresión “*podrá disponer*” con posterioridad a la firma del convenio con la conformidad de la acreditante; empero como dichas particularidades ya se encontraban debidamente analizadas en el fallo reclamado, no era dable formular un nuevo pronunciamiento; que la defensa de nulidad del contrato de apertura de crédito, basada en que dicho acuerdo de voluntades contenía cláusulas contrarias a las normas establecidas por preceptos de interés público; era infundada, ya que el enjuiciado de ningún modo identificaba cuál era el marco normativo que supuestamente era de interés público y que era adverso a la voluntad de los interesados contenida en el contrato básico.

r).- Que de igual manera, lo alegado en relación de que no se fijó la porción de la cual respondería cada

finca hipotecada; era infundado ya que en el contrato básico en su cláusula octava, al referirse a los bienes otorgados en garantía, con toda claridad, se acordó que la hipoteca comprendería todo cuanto correspondiera en derecho a los inmuebles hipotecados, sin reserva ni limitación alguna, de acuerdo con los artículos 2896 y 2897 del Código Civil para el Distrito Federal, por lo que acorde a la voluntad expresa de las partes, no era indispensable que se fijara una porción sobre cada finca, ni tampoco el valor real de cada una de ellas, toda vez que la legislación mexicana no la exigía de esa manera.

s).- Que sobre la cantidad que garantizarían los bienes hipotecados, tampoco existía imprecisión, pues con claridad, en el contrato del crédito se especificó cuál era la porción sobre la que responderían, establecido ello, en la cláusula octava, por lo que era claro que sí existía la identificación precisa del valor que garantizaban los bienes otorgados en garantía, con fundamento en los artículos 2893 y 2896 del Código Civil para el Distrito Federal

t).- Que era evidente que lo concertado por los contendientes no era nulo de pleno derecho, ni transgredía disposiciones de orden público, como erróneamente se pretendió establecer, máxime que ello se hacía valer después de haber aprovechado en su totalidad de los efectos del convenio tachado de nulo, y por esa razón, el criterio federal que transcribía el demandado no resultaba conculcado en su perjuicio; la defensa de la improcedencia de la vía sumaria civil; era infundada, pues según se había demostrado, así lo declaró el juez natural; la excepción de incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte del demandante; era infundada, ya que el enjuiciado insistía en señalar que en ningún momento recibió el monto del crédito, particularidad que ya se encontraba debidamente dilucidada en la sentencia reclamada, motivo por el cual, no era dable efectuar un nuevo pronunciamiento; que igual situación sucedía respecto a los intereses moratorios, puesto que el demandado volvía a señalar que en ningún momento recibió el monto del crédito, amén de que no hubo incumplimiento de su parte; pero todo ello sin que lo acreditara; que la defensa de falta de acción y carencia de derecho basada en la particularidad de que la actora [REDACTED]

MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,

no era una institución de crédito, resultaba infundada, pues era un hecho notorio que la enjuiciante sí formaba parte del sistema bancario mexicano, y si a ello se adicionaba la circunstancia de que el contador público en su certificado contable asentó que fue designado por [REDACTED]

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [REDACTED] DIVISIÓN

FIDUCIARIA, para elaborar las estimaciones que rindió; entonces era claro que sus argumentos resultaban infundados, sin que fuera óbice mencionar que las tasas de interés que se tomaron en cuenta, fueran las que expresamente se autorizaron en el contrato de apertura de crédito (TIE) según se advertía del contenido de la estipulación cuarta, por lo que si desde el particular punto de vista del enjuiciado, se aplicaron diversos instrumentos sin identificar cuáles, y que era indispensable evidenciar de dónde y cómo se obtuvieron, también era infundado, pues el contador público aludido con toda claridad expresó la manera en que obtuvo el saldo a su cargo, así como la forma en que aplicó los intereses concertados; en sustento de lo anterior invocó el criterio con el rubro: “CERTIFICADO

DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO. NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE LAS PUBLICACIONES OFICIALES EN DONDE APAREZCAN LAS TASAS QUE SE APLICARON EN LA CUANTIFICACIÓN DE LOS INTERESES.”

u).- Que respecto a la competencia, tampoco se hacía un nuevo pronunciamiento, pues la misma, en su oportunidad fue declarada infundada por el tribunal de apelación; compartiendo idénticas consideraciones la excepción de falta de legitimación activa y pasiva, pues a través de los instrumentos que la actora ofreció como pruebas de su parte, con toda precisión se corroboraba el interés jurídico que tenía sobre el crédito controvertido, motivo por el cual de ningún modo se le podía estimar como una persona extraña, amén de que el hecho de que el contrato básico en un inicio lo hubiera celebrado con una empresa distinta, ello no excluía la participación de la enjuiciante en el proceso de origen, máxime si se tomaba en cuenta, que en su oportunidad le fue debidamente notificada la cesión del crédito al obligado, por tanto, si desde el particular punto de vista del demandado su crédito

no fue objeto de cesión, entonces era claro que la defensa en comento, era infundada, ya que el enjuiciado con toda nitidez reconoció la suscripción del contrato de apertura de crédito como del título de crédito a través del cual se documentó la disposición de esos recursos.

En consecuencia, deben continuar rigiendo el sentido del fallo por falta de impugnación.

Es aplicable la jurisprudencia 499, visible en la página 351, tomo IV, Materia Civil, Octava Época, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercero Circuito, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario es el siguiente:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo,

demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada.”

Cobra aplicación también, la jurisprudencia I.6o.C. J/20, sustentada por este **Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito**, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 86, Febrero de 1995, Octava Época, visible en la página 25, cuyo rubro y contenido versan de la manera siguiente:

**“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES,
CUANDO NO CONTROVIERTEN TODAS LAS
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA**

RECLAMADA. *Cuando son varias las consideraciones legales en que descansa la sentencia reclamada y los conceptos de violación no controvierten la totalidad de éstas, los mismos resultan inoperantes, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo, debido a la deficiencia en el ataque de los fundamentos en que se sustenta el referido fallo, los que con tal motivo quedarían firmes, rigiendo a éste.”*

Finalmente, el quejoso aduce que la ad quem dejó de aplicar a su favor el principio pro persona, consagrado en el artículo 1º constitucional, que informaba los derechos humanos en el ámbito internacional, el cual prescribe que debía acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trataba de reconocer derechos protegidos, debiendo preferir a la norma que mas proteja al individuo u optime un derecho fundamental.

Los precedentes motivos de disenso son inoperantes, con base en lo que a continuación se puntualiza:

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio.

Así, el control de convencionalidad dispone la obligación de los juzgadores de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo la protección más amplia a las personas.

Sin embargo, su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y

procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer requisitos de procedencia tanto de la admisibilidad de los medios de defensa, como de los presupuestos de la acción intentada, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de aplicación e interpretación de normas, pues la circunstancia aducida por el impetrante del amparo, en donde medularmente aduce que desconocía la cesión de su crédito, lo cual como se ha visto es infundado, además de que no controvertió distintos temas de trascendencia jurídica como lo son el análisis que emprendió la sala responsable respecto al vencimiento anticipado del contrato de crédito, excepciones y defensas, personalidad, competencia, legitimación, intereses ordinarios y moratorios; no puede llegar al extremo de suplantar la legislación acorde al caso concreto, como en la especie sucede, al haberse acreditado la procedencia de la acción de vencimiento anticipado para cubrir el importe del adeudo concertado en el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria.

Cabe agregar, que el principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de “*derechos*” alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.

Cobra aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Décima Época, visible en la página 906, que textualmente dice:

“PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos

establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.”

También es aplicable, la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1241, que a la letra dice:

“PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES. El principio pro homine y el control de convencionalidad se encuentran tutelados por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la entrada en vigor de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. El principio pro homine es aplicable en dos vertientes, a saber, el de preferencia de normas y de preferencia interpretativa, ello implica que el juzgador deberá privilegiar la norma y la interpretación que favorezca en mayor medida la protección de las personas. Por su parte, el

"control de convencionalidad" dispone la obligación de los juzgadores de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo la protección más amplia a las personas. Sin embargo, su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de aplicación e interpretación de normas."

Derivado de lo anterior, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 183, de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.- La Justicia de la Unión **NO AMPARA NI PROTEGE** a [REDACTED] contra el acto reclamado a la **Novena Sala** Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la sentencia definitiva de veintiuno de mayo de dos mil quince, dictada en el toca civil **18/2015/1**.

NOTIFÍQUESE; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia, y en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido.

Así lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito por unanimidad de votos de los Magistrados **CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI**, presidente, **ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES** y **GUSTAVO R. PARRAO RODRÍGUEZ** siendo ponente el

tercero de los nombrados, quienes firman ante el Secretario de Acuerdos Licenciado Ernesto Ruiz Pérez, que da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

FIRMADO

CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI.

MAGISTRADO:

MAGISTRADO:

FIRMADO

FIRMADO

**ISMAEL HERNÁNDEZ
FLORES**

**GUSTAVO R. PARRAO
RODRÍGUEZ.**

SECRETARIO DE ACUERDOS.

FIRMADO

LICENCIADO ERNESTO RUIZ PÉREZ.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, **CERTIFICA:** QUE LA PRESENTE COPIA CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE SE EXPIDE EN **NOVENTA FOJAS ÚTILES**, PARA SER REMITIDA COMO TESTIMONIO DE LA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CIVIL **D.C. 478/2015**, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A **QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.-** DOY FE.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. ERNESTO RUIZ PÉREZ.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE ACUERDOS DEL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, **HACE CONSTAR:** QUE CON FECHA **QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE** Y DENTRO DEL TÉRMINO QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 184 DE LA LEY DE AMPARO, SE ENTREGÓ A LA SECRETARÍA DE ACUERDOS DE ESTE TRIBUNAL EL ENGROSE DEL AMPARO DIRECTO CIVIL NÚMERO D.C. 478/2015.

**EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL SEXTO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.**

LIC. ERNESTO RUIZ PÉREZ.

**CAHZ/mmch/aag*

EL SUSCRITO LICENCIADO ERNESTO RUIZ PÉREZ SECRETARIO DE ACUERDOS DEL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, **CERTIFICA** QUE ESTA HOJA PERTENECE A LA PARTE FINAL DE LA RESOLUCIÓN DE **OCHO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE**, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CIVIL **D.C. 620/2014**, PROMOVIDO POR [REDACTED], **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, POR CONDUCTO DE SU APODERADO [REDACTED], EN EL QUE SE RESOLVIÓ **NEGAR EL AMPARO**. CONSTE.

Niega amparo, infundados los conceptos de violación dado que se encuentra ajustado a derecho la cesión del crédito litigioso; inoperante no controvierte las razones medulares que expuso la ad quem, al examinar los temas relativos al vencimiento anticipado del contrato de crédito, excepciones y defensas, personalidad, competencia, legitimación, intereses ordinarios y moratorios.